



MARÍA DEL MAR HERAS HERNÁNDEZ (España)

Profesora Titular de Derecho civil en la Universidad Rey Juan Carlos. Licenciada en Derecho por la UCM. Diplomada en la Escuela de Práctica Jurídica en la UCM. Doctora en Derecho, con la tesis doctoral: *Los sujetos en el contrato de depósito*. Premio Extraordinario de Doctorado. Cuenta con cuatro tramos de investigación científica reconocidos por el CNEAI. Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Derecho civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (2020). Profesora Distinguida de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana (2020).

En materia de la protección jurídica de los menores cuenta con dos monografías. *La adopción abierta*, Bosch, 2020 y *El acogimiento convencional de menores: Aspectos legales, doctrinales y jurisprudenciales*, Montecorvo, 2000. Entre sus aportaciones científicas más recientes: «Igualdad jurídica, matrimonio y discapacidad: apoyos y salvaguardias proyectados» en *La voluntad de la persona protegida. Oportunidades, riegos y salvaguardias*, Dykinson, 2018. «La designación del heredero bajo condición de cuidar al testador. Una disposición testamentaria al alza» 2019. «El derecho del progenitor con discapacidad a elegir y recibir el apoyo debido para el adecuado ejercicio de la patria potestad, atendido el interés del menor. La imprescindible supresión legal de su prórroga o rehabilitación», *Un nuevo derecho para las personas con discapacidad*, dir. Ceirra Bravo de Mansilla/Leonardo Pérez Gallardo, Ediciones Olejnik, 2021. «Patria potestad y discapacidad. Apoyo a la parentalidad responsable y protección del menor: La imprescindible supresión legal de la patria potestad prorrogada y rehabilitada», *Revista de Derecho Privado*, Mes 4º, julio-agosto 2021. «Vías de reparación frente al acoso sexual en el ámbito laboral» en *Ser mujer en el mercado de trabajo: Dificultades, oportunidades y retos*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2021. «El régimen transitorio en la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica» en *El ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad*, dir. Montserrat Pereña Vicente/María del Mar Heras Hernández, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

Ha participado en numerosos proyectos de investigación en materia de discapacidad y/o dependencia. Miembro del equipo de investigación del Proyecto «*Ser mujer en el Mercado de Trabajo*». Vocal del Comité de Ética de la Investigación de la URJC. Miembro del Grupo de investigación CEDPP (Centro de Estudios de Derecho de la Persona y Patrimonio). Socia del Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE). Vocal Titular en distintos Tribunales evaluadores del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Jueces y Letrados de la Administración de Justicia desde el año 2000 hasta la actualidad.

Visite
www.edicionesolejnik.com



“Una vez más, desde Cuba, Leonardo PÉREZ GALLARDO construye sólidos puentes en el mundo académico, en la ocasión acompañado por la profesora María del Mar HERAS HERNÁNDEZ, que lo hace desde España; esta vez entregan al lector una obra colectiva sobre un tema que pertenece al 'nuevo' derecho de las familias, cual es, el de la implicancia de la socio-afectividad en el sistema jurídico de la filiación [...].

” Nuevo, aunque no tanto, pues desde antiguo, el derecho de la filiación dio relevancia a la posesión de estado, que presume las relaciones afectivas entre quienes se tratan como padre/madre e hijo/a [...].

” ... el libro que el lector tiene en sus manos sirve para estar atento. Nadie debe creer que estas cosas no pasan en el mundo real y por lo tanto el Derecho puede permanecer en silencio. Es sabido que, normalmente, ese silencio perjudica a quien más necesita de respuesta jurídica.

“La mayoría de los aportes aquí reunidos muestra cómo los operadores del Derecho de los diversos países están dando soluciones y, mejor aún, están proponiendo alternativas más allá del binarismo.

“Una nueva prueba, pues, de que el Derecho sigue cumpliendo la importante función de solucionar conflictos humanos y no, como algunos lastimosamente creen, el de generar nuevas barreras”.

Aída R. KEMELMAJER DE CARLUCCI
“Prólogo”



Enazu
“Mix Match E-55”



PROPUESTAS PARA UN NUEVO DERECHO DE
FILIACIÓN: LA MULTIPARENTALIDAD



LEONARDO B. PÉREZ GALLARDO
MARÍA DEL MAR HERAS HERNÁNDEZ
(DIRECTORES)

LEONARDO B. PÉREZ GALLARDO / MARÍA DEL MAR HERAS HERNÁNDEZ (Directores)



BIBLIOTECA DE DERECHO CIVIL

Lex

PROPUESTAS PARA UN NUEVO DERECHO DE FILIACIÓN: LA MULTIPARENTALIDAD



LEONARDO B. PÉREZ GALLARDO (Cuba)

Graduado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 1989. Master en Derecho privado por la Universidad de Valencia, España. Doctor en ciencias jurídicas por la Universidad de La Habana. Especialista en Derecho civil por la Universidad de La Habana. Especialista en Derecho notarial por la Universidad de La Habana.

Profesor Titular en el Departamento de Derecho civil y de familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana a la par que notario de la Dirección de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia.

Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, Vicepresidente de la Sociedad del Notariado Cubano. Miembro de Número de la Sociedad de Derecho Procesal. Tiene a su cargo la Revista española de *Legislación y Jurisprudencia*. Presidente del Consejo Editorial de la *Revista Cubana de Derecho*. Catedrático de la Academia Notarial Americana de la Unión Internacional del Notariado. Académico Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Miembro Titular de la Sala Internacional del Instituto de Derecho Notarial de la Universidad Notarial argentina. Miembro Honorario del Instituto de Derecho e Integración del Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 2ª circunscripción, Rosario, Argentina. Académico correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina. Profesor Honorario de la Universidad Abierta Interamericana de Argentina y de la Universidad de Lomas de Zamora, Argentina.

Becario por el Consejo General del notariado español en 1995, en el 2004 y en el 2009. Visiting profesor en la Universidad de Bolonia, Italia (2014) e igualmente de la Universidad de Perugia, Italia (2022).

Presidente del Tribunal Nacional Permanente de grados científicos para las Ciencias Jurídicas (2008-2022). Profesor Invitado por las Universidades de Holguín, Camagüey, Matanzas, Oriente y Pinar del Río.

Autor de innumerables artículos científicos, textos docentes, monografías, libros colectivos, publicados en Cuba, Chile, Puerto Rico, Italia, Nicaragua, España, Argentina, Bolivia, Perú, México, Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Lituania y Rumanía.

Conferenciante invitado por varias universidades europeas y latinoamericanas, así como por colegios de abogados, de notarios o academias, y otras instituciones públicas y privadas,

Ponente en innumerables jornadas, seminarios, talleres y congresos nacionales e internacionales, en Cuba, Puerto Rico, España, Italia, Panamá, Colombia, Bolivia, Uruguay, México, Argentina, Perú, Rumanía, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Indonesia. Profesor Invitado por universidades de Guatemala, Bolivia, México, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Ecuador y Honduras.

Director de más de cincuenta tesis de licenciatura, maestría y especialidad en diversos temas de Derecho civil, familiar y notarial y de 17 tesis doctorales.



BIBLIOTECA DE DERECHO CIVIL

Filippo Viglione
(Director)

Carlos Antonio Agurto Gonzáles
Sonia Lidia Quequejana Mamani
Benigno Choque Cuenca
(Coordinadores Generales)

LEONARDO B. PÉREZ GALLARDO
MARÍA DEL MAR HERAS HERNÁNDEZ
(Directores)

**PROPUESTAS PARA UN NUEVO
DERECHO DE FILIACIÓN:
LA MULTIPARENTALIDAD**

Edición al cuidado de
Carlos Antonio Agurto Gonzáles
Sonia Lidia Quequejana Mamani
Benigno Choque Cuenca



Título: PROPUESTAS PARA UN NUEVO DERECHO DE FILIACIÓN:
LA MULTIPARENTALIDAD

- © LEONARDO B. PÉREZ GALLARDO
MARÍA DEL MAR HERAS HERNÁNDEZ
(Directores)
- © Ediciones Olejnik
Huérfanos 611, Santiago - Chile
E-mail: contacto@edicionesolejnik.com
Web site: <http://www.edicionesolejnik.com>

Primera edición en Ediciones Olejnik: 2022

ISBN: 978-956-407-271-5

Diseño de Carátula: Ena Zuñiga
Diagramación: Luis A. Sierra Cárdenas

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso expreso del editor.

Impreso en Argentina 2022 Printed in Argentina

ÍNDICE

PRÓLOGO	17
---------------	----

PRIMERA SECCIÓN PRINCIPIOS Y FUNDAMENTO DE LA MULTIPARENTALIDAD

PLURIAFECTIVIDAD Y LAS REALIDADES QUE MERECE SER RECONOCIDAS

María Berenice Díaz

Abogada especializada en Derecho Homoafectivo, Familia y Sucesiones.

Vicepresidente Nacional del IBDFAM

(Instituto Brasileño del Derecho de Familia)

1. El primado de la afectividad	21
2. Filiación socioafectiva	23
3. Pluriparentalidad	24
4. Homoparentalidad	26
Bibliografía	28

ALEGATO A FAVOR DEL RECONOCIMIENTO DEL PARENTESCO SOCIOAFECTIVO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

María Amalia Blandino Garrido

Profesora Titular de Derecho civil

Universidad de Cádiz

1. Estado de la cuestión	31
2. Constitucionalidad de una reforma legislativa que reconociera el parentesco socioafectivo	34
3. Parentesco socioafectivo y reconocimientos de complacencia	35
4. Parentesco socioafectivo y multiparentalidad	38
5. Propuesta de regulación para la determinación del parentesco socioafectivo	41
5.1. La declaración de voluntad de instaurar la relación socioafectiva	41
5.2. Relación de afectividad estable	44
5.3. Forma	44
5.4. Consentimientos, audiencias y aprobaciones	45
6. Efectos del parentesco socioafectivo	45
7. El carácter irrevocable de la determinación del parentesco socioafectivo	46
8. A modo de conclusión	49
Referencias bibliográficas	49

LA SUMA DE AFECTOS NO RESTA RESPONSABILIDADES

Ana María Carriquiry

Jueza de Personas y Familia en Orán, Provincia de Salta,
Argentina

1. Análisis del art. 558 del Código civil y comercial y sus fuentes filiatorias ..	53
--	----

2.	Tratamiento del fallo de triple filiación	54
3.	Construcción socioafectiva	56
4.	La suma de afectos no resta responsabilidades	57
5.	Conclusiones	60
	Bibliografía	61

LA MULTIPARENTALIDAD Y LOS PRINCIPIOS

Ricardo José Dutto

Juez del Tribunal Colegiado de Familia no. 5,
Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Director de la carrera de Posgrado Abogado especializado en Derecho de las Familias,
dependiente de la Universidad Nacional de Rosario.

Profesor Titular cátedra Derecho Civil
y Derecho de las Familias, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Rosario

1.	¿Qué son los principios?	63
2.	Los principios en las relaciones de familia	69
3.	Los principios en el Derecho procesal	72
4.	Principios relativos a la inserción de la socioafectividad	75
5.	La socioafectividad como principio jurídico	88
	Bibliografía	91

VIEJOS DOGMAS Y ESCENARIOS EMERGENTES DE MULTIPARENTALIDAD:
UNA APROXIMACIÓN DESDE ESPAÑA

Esther Farnós Amorós

Profesora Tenure-Track de Derecho civil
Universitat Pompeu Fabra

1.	Introducción	95
2.	Autonomía privada y filiación	97
	2.1. La filiación: un ámbito tradicionalmente indisponible	97
	2.2. Sobre la renuncia a la maternidad	99
	2.3. Sobre la renuncia a la paternidad	103
3.	Alcance de la multiparentalidad en Derecho español	108
	3.1. Tímidos reconocimientos en la normativa vigente	108
	3.2. Una visión de Derecho comparado	109
	3.3. ¿Cuántos más, mejor? Multiparentalidad y gestión de conflictos	110
4.	Reflexiones finales: hacia modelos colaborativos de paternidad y maternidad (y más allá)	112
	Bibliografía	114

UN NIÑO O UNA NIÑA PUEDEN TENER MÁS DE DOS MADRES O DE DOS PADRES.
HACIA EL RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LA MULTIPARENTALIDAD

María Paz García Rubio

Catedrática de Derecho Civil,
Universidad de Santiago de Compostela

1.	Planteamiento de la cuestión	119
2.	Quiebra del dogma de la biparentalidad	120
3.	El reconocimiento de la multiparentalidad en el ámbito comparado	122
4.	El pálido reflejo en el Derecho español	123

5.	Algunas consecuencias del reconocimiento de situaciones de parentalidad múltiple	128
6.	A modo de reflexión final	129
	Bibliografía	129
LA FILIACIÓN ANTE EL NUEVO RETO DE LA MULTIPARENTALIDAD		
Francisco Javier Jiménez Muñoz		
Profesor Titular de Derecho Civil - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)		
España		
1.	Introducción. De la familia a las familias y el nuevo concepto jurídico de familia	131
2.	Los conceptos tradicionales de familia y filiación	132
3.	La doble maternidad y la doble paternidad	134
	3.1. La admisión de la doble maternidad o doble paternidad por adopción	135
	3.2. La admisión de la doble maternidad «por naturaleza». La doble paternidad	139
4.	La multiparentalidad	150
	4.1. Las familias reconstituidas: la relación entre padrastros e hijastros ...	150
	4.2. La multiparentalidad plena	153
	Referencias bibliográficas	157
PLURIPARENTALIDAD: IMPLICACIONES, REFLEXIONES Y DESAFÍOS PARA EL PENSAMIENTO JURÍDICO CONTEMPORÁNEO BRASILEÑO		
Gabriela Mascarenhas Lasmar		
Profesora de la Facultad Milton Campos.		
Abogada		
Manoel Antônio Silva Macêdo		
Juez del Tribunal de Justicia do Pará-Brasil		
1.	Introducción	161
2.	Evolución histórica de la familia	164
3.	La pluriparentalidad, según el Supremo Tribunal Federal	166
4.	La configuración de la pluriparentalidad	168
	4.1. De la provisión de alimentos	172
	4.2. De la sucesión	173
	4.3. De la custodia	176
	4.4. Reconocimiento e inscripción de la paternidad/maternidad socioafectiva a la luz de la Disposición n. 63/2017 del CNJ	176
5.	Consideraciones finales	178
	Bibliografía	178
ASPECTOS SOBRE MULTIPARENTALIDAD EN EL DERECHO RUMANO. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD PARENTAL EN MANOS DE VARIAS PERSONAS		
Bogdan Dumitru Moloman		
Asesor Superior - Compartimento de Autoridad Tutelar (Administración Pública, Departamento Jurídico) del Ayuntamiento de Bistria, Rumanía. Redactor jefe adjunto de la Revista de Derecho de Familia (Rumanía).		
1.	Breves observaciones introductorias	183
2.	Transferencia de la autoridad parental... ¿una multiparentalidad disfrazada?	185

a)	El ejercicio de la autoridad parental por personas distintas de los progenitores	186
b)	El progenitor menor de edad y el ejercicio de la autoridad parental	188
c)	Delegación voluntaria de la autoridad parental	188
d)	Ejercicio de la autoridad parental y el padrastro. El caso de adopción del menor por el cónyuge del progenitor biológico	191
3.	Conclusión	193
	Bibliografía	193

LA MULTIPARENTALIDAD EN EL DERECHO FAMILIAR CUBANO:
UNA OPCIÓN POSIBLE

Leonardo B. Pérez Gallardo

Profesor Titular de Derecho civil, - Facultad de Derecho - Universidad de La Habana
Notario

1.	Ni crisis, ni destrucción: el binarismo filiatorio puede ser compatible con otras opciones	197
2.	La multiparentalidad en el Código de las familias: una excepción a la regla	200
2.1.	La determinación del orden de los apellidos en supuestos de multiparentalidad: el interés superior del niño, la niña o el adolescente como brújula norteadora	202
3.	Las modalidades de multiparentalidad recepcionadas por el Código	204
3.1.	Multiparentalidad primigenia	206
3.1.1.	En supuestos de filiación asistida	206
3.1.2.	En cualquier otro supuesto que prevea un acuerdo sobre multiparentalidad	208
3.2.	Multiparentalidad sobrevenida	208
3.2.1.	En los casos de filiación socioafectiva	209
3.2.1.1.	La socioafectividad como nueva fuente filiatoria y con ello como nuevo tipo de parentesco	213
3.2.1.2.	Sujetos legitimados para interesar su reconocimiento	215
3.2.2.	En supuestos de adopción por integración	216
3.	A modo de epitome	218
	Bibliografía	219

LE NUOVE GENITORIALITÀ NELL'ESPERIENZA ITALIANA E NUOVE
GENITORIALITÀ NELL'ESPERIENZA ITALIANA

Michele Sesta - Professore Alma Mater, Università di Bologna,

Enrico Al Mureden - Ordinario di Diritto civile, Università di Bologna

Maria Novella Bugetti - Associato di Diritto privato, Università di Milano

1.	Dalla famiglia fondata sul matrimonio... ..	223
2.	... alla precarietà della vita di coppia	225
3.	Stabilità della filiazione e nuova dimensione sociale dei rapporti familiari	226
4.	Bigenitorialità e genitorialità sociale nella famiglia ricomposta	228
5.	L'interesse del minore nella famiglia ricomposta tra diritto alla bigenitorialità e «genitorialità sociale»	229
6.	Famiglia ricomposta ed interesse del minore alla permanenza nella casa familiare	233
7.	Multigenitorialità e obblighi di mantenimento	235

8.	Le famiglie che si sovrappongono nel tempo tra autonomia privata ed espansione dei diritti indisponibili	240
9.	Limiti legali alle pratiche di fecondazione assistita e omogenitorialità: uno sguardo all'ordinamento italiano	242
10.	La genitorialità del figlio nato in Italia con pratiche procreative in contrasto con la l. no. 40/2004	244
11.	L'ingresso in Italia di atti di nascita o sentenze straniere di riconoscimento di genitorialità in capo a coppie omosessuali	246
12.	Segue. Il problema (invero comune alle coppie eterosessuali) della procreazione mediante maternità surrogata	247
13.	Il tramonto del ricorso all'adozione mite (e del divieto di maternità surrogata) o un suo nuovo corso?	248
14.	Il riconoscimento in Italia di adozione straniera da parte di coppia omosessuale	251
	Referencias bibliográficas	254

SEGUNDA SECCIÓN
SUS FUENTES

I. LA VOLUNTAD DECLARADA FORMALMENTE DE QUERER ASUMIR UNA RESPONSABILIDAD PARENTAL PLURAL: LA «PARENTALIDAD SOCIOAFECTIVA» O INTENCIONADA CONCURRENTEMENTE CON LA DOBLE FILIACIÓN BIOLÓGICA. LOS ACUERDOS PROCREACIONALES O DE COLABORACIÓN MULTIPARENTAL

MULTIPARENTALIDAD *VERSUS* FILIACIONES CONTRADICTORIAS

Gloria Díaz Pardo

Profesora Titular (i), - Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid

	Introducción	261
1.	Modelos familiares en el plano jurídico en Derecho español	262
	1.1. Situación actual. Familias ensambladas o reconstituidas	262
	1.2. Concepto y valor jurídico del término socioafectividad	265
	1.3. Reconocimiento de complacencia	267
2.	Filiaciones contradictorias y multiparentalidad en Derecho español	270
	2.1. Sistema binario y realidad social	270
	2.2. Posesión de estado, filiación socioafectiva y multiparentalidad	271
3.	Reflexión final	275
	Bibliografía	276

RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE E DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA: SEUS FUNDAMENTOS, SEUS EFEITOS JURÍDICOS E SUA IMPORTÂNCIA NA CONTEMPORANEIDADE PARA UMA CONVIVÊNCIA FAMILIAR DIGNA

Maria Helena Diniz

Professora Titular de Direito civil

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Coordenadora do Núcleo de pesquisa em direito civil comparado nos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) da PUCSP

1.	Breve nota introdutória	278
----	-------------------------------	-----

2.	Multiparentalidade e socioafetividade: delimitação conceitual, fundamentos e consequências jurídicas de seu reconhecimento	279
3.	Afetividade e respeito à dignidade humana como paradigmas do direito à convivência familiar na multiparentalidade e na filiação socioafetiva	287
4.	«Bullying» familiar: uma realidade do século XXI	290
5.	Conflito entre filiação biológica e socioafetiva	293
6.	Princípio do superior interesse da criança e do adolescente como diretriz solucionadora de polêmicas relativas à multiparentalidade e à socioafetividade	297
7.	Papel de mediação familiar como instrumento para promoção da convivência familiar digna	304
8.	Responsabilidade civil por lesão a direito da personalidade da criança e do adolescente por abandono afetivo	306
9.	Conclusão	309
	Bibliografia	310

LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS:
EL VACÍO JURÍDICO COMO OBSTÁCULO A SU CONSOLIDACIÓN

Vanessa García Herrera
Profesora Titular interina de Universidad,
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

1.	La familia: una institución multiforme	315
	La familia reconstituida como modelo familiar del futuro	317
3.	Contexto legislativo español	320
	3.1. Un vacío jurídico perjudicial para todos los miembros de la familia .	320
	3.2. Disposiciones aplicables	323
	3.3. Criterios jurisprudenciales	325
	3.4. Posibles vías a utilizar por el cónyuge o el conviviente no progenitor para alcanzar un status legal	326
	3.5. Estado de la cuestión en Aragón y en Cataluña	329
	3.5.1. Derecho aragonés	329
	3.5.2. Derecho catalán	330
4.	Consideraciones finales: propuestas de lege ferenda	332
	Bibliografía	335

EL VALOR JURÍDICO DE LA SOCIOAFECTIVIDAD EN EL NUEVO CONCEPTO DE PLURIPARENTALIDAD EN EL DERECHO DE FAMILIA

Gema González Coloma
Profesora asociada de Derecho Civil,
Universidad Rey Juan Carlos.
Abogada

1.	El concepto de socioafectividad y pluriparentalidad en el Derecho de familia: la disrupción del dogma binario	337
2.	Principio del mejor interés del menor y posesión de estado en relación con la socioafectividad	342
3.	Conclusiones	349
	Bibliografía	350

SOCIOAFECTIVIDAD, INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS
¿DE LO CLÁSICO A LO EXTRAVAGANTE? UN ESTUDIO CONTINUO

Marisa Herrera

Profesora adjunta de Derecho de familia y sucesiones

Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.

Profesora Titular de Derecho de familia

Facultad de Derecho, Universidad de Palermo,

Argentina

1.	Palabras introductorias	353
2.	La noción de socioafectividad	356
2.1.	Algunas consideraciones generales	356
2.2.	Precedentes que no pasaron desapercibidos	359
3.	Relaciones fácticas y soluciones jurídicas	361
3.1.	Introito	361
3.2.	La reparación del daño no patrimonial (moral)	372
3.3.	Familia ensamblada de facto o afectiva	378
3.4.	Filiación adoptiva y socioafectividad: la flexibilización de los tipos adoptivos	380
3.5.	Técnicas de reproducción humana asistida y coparentalidades plurales	384
4.	Breves palabras de cierre	391
	Bibliografía	393

A PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA E A MULTIPARENTALIDADE NA
DOCTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS.
SITUAÇÃO JURÍDICA ATUAL E ALGUMAS POLÊMICAS

Flávio Tartuce

Coordenador do programa de mestrado da Escola Paulista de Direito (EPD).

Diretor-Geral da Escola Superior de Advocacia da

Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (ESAOABSP).

Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual (IBDCont)

e do Instituto Brasileiro de Direito de Família em São Paulo (IBDFAMSP).

	Introdução	401
1.	Breve histórico a respeito da parentalidade socioafetiva no Brasil. O seu enquadramento como forma de parentesco civil, no art. 1.593 do Código Civil brasileiro	401
2.	A decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro a respeito da parentalidade socioafetiva e da multiparentalidade	407
3.	A extrajudicialização da parentalidade socioafetiva e da multiparentalidade no Brasil	411
4.	Da impossibilidade de se reconhecer a multiparentalidade em casos de adoção prévia	415
5.	Da ação vindicatória de filho e do reconhecimento da multiparentalidade Bibliografia	418 419

II. EL EXCEPCIONAL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA COEXISTENCIA DE LA DOBLE FILIACIÓN BIOLÓGICA RECONOCIDA LEGALMENTE Y LA ADOPTIVA

LA ADOPCIÓN POR INTEGRACIÓN: CAUSA-FUENTE SOBREVENIDA DE LA MULTIPARENTALIDAD

Dra. Ana María Álvarez-Tabío Albo
Profesora Titular de Derecho civil y de familia,
Facultad de Derecho - Universidad de La Habana

Introducción	423
1. ¿Qué razones anteceden y justifican la presencia de la adopción por integración? Las familias ensambladas / madres, padres, hijas e hijos afines / la socioafectividad como fuente de creación de lazos filiatorios / la posesión de estado	425
1.1. Las familias ensambladas y la socioafectividad	425
1.2. La posesión de estado de madre, padre, hija o hijo	427
2. La adopción	429
2.1. Evolución de su fundamento	429
2.2. ¿Qué es la adopción?	431
2.3. Diferencias entre las diversas fuentes de filiación	431
3. La adopción por integración	432
3.1. Diferencias con la adopción en general	434
3.2. Adopción por integración y la parentalidad afín	435
3.3. Consecuencias o implicaciones del reconocimiento del carácter pleno e irrevocable de la adopción	436
3.4. ¿Qué nos dicen otras legislaciones?	439
4. Escenarios en los que se puede presentar la adopción por integración; reconocimiento de la multiparentalidad	440
5. Conclusiones	443
Referencias bibliográficas	445

UNA PROPUESTA DE FILIACIÓN MÚLTIPLE: LA ADOPCIÓN DEL HIJO DE LA PAREJA CUANDO EL OTRO PROGENITOR HA PREMUERTO

María del Mar Heras Hernández
Profesora Titular de Derecho civil,
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

1. La biparentalidad como pieza angular del actual derecho de filiación ante la falta de reconocimiento legal de la multiparentalidad en el ordenamiento jurídico español	449
2. Concepto de multiparentalidad <i>stricto sensu</i> y en sentido amplio	451
3. Interrogantes que se plantean	452
4. Identificación de algunos de los supuestos constitutivos de una posible plurifiliación	453
4.1. Filiación socioafectiva concurrente con la filiación biológica: del reduccionismo biológico a la filiación basada en la voluntad	453
4.2. Paternidades contradictorias: el conflicto surgido entre el padre legal y el progenitor	455
4.3. Supuestos de gestación subrogada cuando la madre gestante es además madre biológica o se incorpora voluntariamente a una relación filial dual	455

4.4.	Procreación utilizando técnicas de reproducción asistida	456
5.	Una propuesta excepcional de multiparentalidad: la adopción del hijo del cónyuge o conviviente cuando el otro progenitor ha premuerto o ha sido declarado fallecido	457
	5.1. Sus particularidades. La interpretación del art. 178. 2 del Código Civil	457
	5.2. Argumentos que sirven de apoyo al reconocimiento legal de la hipótesis planteada como un supuesto de filiación múltiple	461
5.3.	Efectos derivados del reconocimiento legal del supuesto descrito como un posible supuesto de multiparentalidad	463
6.	Reflexiones finales	463
	Referencias bibliográficas	465

TERCERA SECCIÓN
IMPLICACIONES SUCESORIAS DERIVADAS DE LA MULTIPARENTALIDAD

FAMILIAS RECONSTITUIDAS, MULTIPARENTALIDAD
Y SUCESIONES: NUEVOS RETOS

Vincenzo Barba
Catedrático de Derecho Civil,
Universidad de Roma «La Sapienza»

1.	Derecho civil y sociedad contemporánea	469
2.	Las familias recompuestas: rasgos característicos y algunas regulaciones ..	471
3.	Multiparentalidad e interés superior del menor	477
4.	La familia recompuesta: el papel del progenitor afín	480
5.	Una propuesta de lege ferenda: el progenitor afín de hecho y el progenitor afín judicialmente reconocido	482
6.	Sigue: propuesta para una regulación de los derechos sucesorios de la hija o el hijo afín	486
7.	Conclusiones	489
	Referencias bibliográficas	490

LOS NUEVOS MODELOS FAMILIARES:
SU INCIDENCIA EN EL DERECHO DE SUCESIONES

María Teresa Echevarría de Rada
Catedrática de Derecho Civil,
Universidad Rey Juan Carlos

1.	Introducción	495
2.	La multiparentalidad. Aproximación a ciertos efectos sucesorios en caso de su admisión	497
3.	Las familias reconstituidas: su posible incidencia en el Derecho sucesorio	500
	3.1. Panorama actual	500
	3.2. Familias reconstituidas y derechos legitimarios	502
	3.2.1. La legítima en la regulación actual	503
	3.2.2. ¿Es posible el reconocimiento de los derechos legitimarios en el ámbito de las familias reconstituidas?	505
3.3.	Sucesión intestada	508
	Bibliografía	511

FECUNDACIÓN *POST MORTEM* Y MULTIPARENTALIDAD

María Núñez Núñez
Profesora de Derecho Civil,
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

1.	Introducción	515
2.	El novedoso concepto de la multiparentalidad	515
3.	Los concebidos por fecundación <i>post mortem</i> . Situación sucesoria actual ..	518
4.	Visión de futuro de la posible relación entre fecundación <i>post mortem</i> y multiparentalidad	522
	Bibliografía	527

LE NUOVE GENITORIALITÀ NELL'ESPERIENZA ITALIANA E NUOVE GENITORIALITÀ NELL'ESPERIENZA ITALIANA*

MICHELE SESTA

Professore Alma Mater, Università di Bologna,

ENRICO AL MUREDEN

Ordinario di Diritto civile, Università di Bologna

MARIA NOVELLA BUGETTI

Associato di Diritto privato, Università di Milano

SOMMARIO: 1. Dalla famiglia fondata sul matrimonio... 2. ... alla precarietà della vita di coppia. 3. Stabilità della filiazione e nuova dimensione sociale dei rapporti familiari. 4. Bigenitorialità e genitorialità sociale nella famiglia ricomposta. 5. L'interesse del minore nella famiglia ricomposta tra diritto alla bigenitorialità e «genitorialità sociale». 6. Famiglia ricomposta ed interesse del minore alla permanenza nella casa familiare. 7. Multigenitorialità e obblighi di mantenimento. 8. Le famiglie che si sovrappongono nel tempo tra autonomia privata ed espansione dei diritti indisponibili. 9. Limiti legali alle pratiche di fecondazione assistita e omogenitorialità: uno sguardo all'ordinamento italiano. 10. La genitorialità del figlio nato in Italia con pratiche procreative in contrasto con la l. n. 40/2004. 11. L'ingresso in Italia di atti di nascita o sentenze straniere di riconoscimento di genitorialità in capo a coppie omosessuali. 12. Segue. Il problema (invero comune alle coppie eterosessuali) della procreazione mediante maternità surrogata. 13. Il tramonto del ricorso all'adozione mite (e del divieto di maternità surrogata) o un suo nuovo corso? 14. Il riconoscimento in Italia di adozione straniera da parte di coppia omosessuale. Referencias bibliográficas.

1. Dalla famiglia fondata sul matrimonio...

La riflessione sulle nuove genitorialità nell'esperienza italiana ed europea deve prendere le mosse dalla ricerca dei nuovi paradigmi familiari, in primo luogo chiedendoci se vi sia una comune linea di tendenza in Europa, o, meglio, nei molteplici ordinamenti dei singoli paesi europei, che contrassegni l'evoluzione dei rapporti familiari e del diritto di famiglia negli ultimi decenni e se vi siano modelli comuni.¹

Credo che la risposta possa sintetizzarsi nel motto: dal legame matrimoniale al legame genitoriale. Si è infatti verificato un passaggio per certi versi epocale, come quello che oltre un secolo e mezzo fa aveva messo in luce Henry SUMNER MAINE,² dalla

* M. SESTA è autore dei parr. 1-3; E. AL MUREDEN dei parr. 4-8; M.N. BUGETTI dei parr. 9-14.

¹ CAGGIA, Fausto, «La complessità nei diritti fondamentali della famiglia nello spazio europeo», in AA.VV., *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, vol. I, ESI, Napoli, 2018, p. 473 ss.

² SUMNER MAINE, Henry, *Ancient Law*, John Murray, London, 1861, rist. 1972, p. 100, ove il celebre riferimento al «movement from Status to Contract».

preminente rilevanza giuridica del matrimonio, che in tutti gli ordinamenti europei stava alla base dei rapporti familiari, a quella attribuita ai legami di filiazione, oggi caratterizzati da una loro propria stabilità giuridica, indipendente da quella del vincolo, se sussistente, che lega i genitori: è proprio la stabilità del vincolo di filiazione, cui corrisponde il comune esercizio della responsabilità genitoriale, che reca riconoscibilità e identità alla famiglia contemporanea. Per di più, come è stato scritto molto efficacemente, l'indissolubilità, che è stata per secoli la caratteristica del matrimonio, si è trasferita dal legame orizzontale di coppia a quello verticale genitori-figli,³ considerato che i genitori, anche se non più coniugati tra loro, conservano un legame giuridico connesso all'esercizio della comune responsabilità verso i figli.

Ma andiamo con ordine. Tutti siamo consapevoli della precarietà che caratterizza i legami orizzontali tra adulti, indipendentemente dalla forma giuridica che li caratterizza, tanto che i moderni ordinamenti europei non frappongono alcuno ostacolo allo scioglimento dei vincoli matrimoniali, sul presupposto che ogni coniuge abbia diritto di separarsi, divorziare, e costituire una nuova famiglia.⁴ Sappiamo anche che per secoli le cose non sono andate in questo modo e che l'ordinamento poneva vincoli rigidi alla possibilità di sciogliere il matrimonio, anche in assenza di figli, perché esso costituiva la garanzia della stabilità dell'istituzione familiare, alla quale l'ordinamento assegnava una irrinunciabile funzione sociale nonché compiti di cura e assistenza dei suoi membri dalla nascita sino alla morte. Di questa risalente concezione è testimone l'art. 29 della Costituzione italiana che, riconoscendo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, evidenzia come la famiglia costituisca un organismo che in qualche modo è titolare di interessi protetti distinti da quelli dei singoli membri che di essa fanno parte. È altresì evidente come questa disposizione consideri il matrimonio quale indispensabile base giuridica per l'attribuzione dei diritti che l'ordinamento riconosce a quella società naturale chiamata 'famiglia'. È anche pertinente notare che il secondo comma di quell'articolo prevede che, nell'ambito del rapporto matrimoniale, il legislatore possa prevedere limiti al principio dell'eguaglianza giuridica e morale tra i coniugi «a garanzia dell'unità familiare», che, nella visione del Costituente, si conferma dunque il bene supremo prioritariamente tutelato.

La formula costituzionale risale a oltre settanta anni fa e naturalmente la realtà socioeconomica che essa a quel tempo rifletteva non è quella odierna di un Paese postindustriale. L'Italia era all'epoca una nazione eminentemente agricola e l'attività agricola era perlopiù esercitata da coltivatori diretti o da mezzadri attraverso il lavoro di tutta la loro famiglia, che era chiamata a svolgere una funzione produttiva di primario rilievo.

L'enorme evoluzione del tessuto economico e sociale che si è prodotta in questi decenni ha inevitabilmente modificato i comportamenti e i valori, favorendo l'accettazione di relazioni familiari anche al di fuori del vincolo matrimoniale, in precedenza assolutamente osteggiate⁵. Sotto questo profilo, l'art. 29, primo comma,

³ EEKELAAR, John, «The End of an Era?», in Sanford N. Katz, in John Eekelaar, Mavis MacLean (a cura di), *Cross Currents: Family Law and Policy in the US and England*, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 649 ss.; BERNARD, Younes, «Le temporalité dans le droit de la famille français», in *Cahiers droit*, 2018, 4, p. 865; LENTI, Leonardo, «Diritto della famiglia», in Giovanni Iudica e Paolo Zatti (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2021, p. XXX

⁴ Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2011, n. 7125, in *DeJure.it*; Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2007, no. 21099, in *Foro it.*, 2008, I, cc. 128 ss., con nota di CASABURI, Geremia, «Separazione e divorzio, questioni vecchie e vecchissime di nuovo all'esame della Cassazione».

⁵ GAZZONI, Francesco, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 1983, *passim*.

Cost. può definirsi metaforicamente un fossile, cioè il resto pietrificato di un organismo un tempo vivente, considerato che, anche in Italia, nonostante la formula costituzionale, oggi l'ordinamento disciplina e attribuisce natura familiare a tante relazioni che non si fondano sul matrimonio, a riprova che il diritto non è tanto quello scritto nella legge quanto piuttosto quello che vive nella società.

Occorre altresì considerare che la norma dell'art. 29 Cost. –risalente all'ormai lontano 1948– deve oggi coordinarsi con il disposto dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, divenuta vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona di cui è parte integrante, secondo il quale a ogni persona è riconosciuto il diritto fondamentale «di sposarsi e di costituire una famiglia»: formula che rende evidente come l'ordinamento, nel suo insieme, consideri familiari relazioni che prescindono dal matrimonio. Anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (da qui CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, enuncia all'art. 12 il diritto dell'uomo e della donna di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto, il che testimonia come possa costituirsi una famiglia anche senza matrimonio, specie con riguardo ai rapporti di filiazione.⁶ Sotto altro riguardo, è stato da tempo dimostrato come il principio dell'art. 29 Cost. vada interpretato secondo criteri sistematici ed innanzi tutto coordinato con quanto disposto dall'art. 2 Cost. e si è quindi concluso che la formula, ancorché fortemente caratterizzata dal richiamo al matrimonio, non impedisca di ritenere che anche una relazione di fatto, la quale ricalchi lo schema della convivenza familiare secondo un modello socialmente e storicamente tipizzato, dia vita ad una formazione sociale, la cosiddetta «famiglia di fatto», nell'ambito della quale la persona deve ricevere protezione e tutela dei propri diritti.⁷

Recentemente ho notato⁸ come la formula costituzionale, che la cultura dei giuristi ha attribuito al pensiero cattolico, si rispecchi singolarmente in un celebre passo del *De Officiis* di Cicerone, il quale rilevava che per natura tutti gli animali hanno il desiderio di procreare e che quindi la prima forma di società risiede nell'accoppiamento, poi si incarna nei figli, infine in una casa e nei beni comuni: «Ciò è dunque il principio della città e quasi il seminario dello Stato». ⁹ Nel pensiero di Cicerone la finalità sociale della famiglia ne costituisce l'essenza stessa. Notavo come il passo del *De Officiis* riecheggi nel titolo della prolusione bolognese di Antonio Cicu,¹⁰ giurista molto conosciuto in America latina e in particolare in Argentina, dove venne edita in lingua spagnola la sua principale monografia.¹¹

⁶ SESTA, Michele, *Manuale di diritto di famiglia*, 8° ed., WKI-CEDAM, Milano-Padova, 2019, p. 251 ss. e p. 339 ss.

⁷ BARCELONA, Pietro, «Famiglia (diritto civile)», in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, p. 780 ss.; BESSONE, Mario, «Commento sub art. 29 Cost.», in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1976, *passim*. Di recente, MORRONE, Andrea, «Commento sub art. 2, Cost.», in Michele Sesta (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 3 ss.

⁸ SESTA, Michele, «La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali», in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2017, p. 570.

⁹ CICERONE, *De off.*, I, 54, «Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae».

¹⁰ CICU, Antonio, «Matrimonium seminarium reipublicae», in *Arch. giur.*, 1921, LXXXV, p. 111, ora in *Scritti minori di Antonio Cicu: Scritti di teoria generale del diritto. Diritto di famiglia*, vol. I, t. 1, Giuffrè, Milano, 1965, p. 199.

¹¹ CICU, Antonio, *El Derecho de familia*, trad. a cura di Santiago Sentis Melendo, con aggiunte a cura di Vittorio Neppi, Ediar, Buenos Aires, 1947.

2. ... alla precarietà della vita di coppia

Siamo tutti consapevoli che oggi le cose non stanno più così e che anzi i diritti e gli interessi individuali dominano tutte le relazioni familiari, non solo degli adulti,¹² ma anche dei figli, perché anche l'interesse del minore, che in Italia definiamo superiore, è pur sempre interesse individuale di uno specifico soggetto minore.¹³

Esaminiamo quanto accaduto negli ordinamenti europei durante gli ultimi decenni, in Italia a partire dal 1970 allorché fu introdotto il divorzio, che ha rappresentato il punto di avvio di una inarrestabile evoluzione del diritto di famiglia. In breve, il regime di coppia coniugata, al quale come si è visto la Costituzione italiana attribuisce una rilevanza fondante, è stato liberalizzato e reso precario. A seguito di numerose riforme succedutesi in quest'ultimo mezzo secolo, oggi la coppia che voglia vivere un rapporto affettivo e sessuale riconosciuto come rilevante dall'ordinamento giuridico può optare per tre o forse quattro distinte situazioni: quella del matrimonio, aperto in molti Paesi europei anche a persone dello stesso sesso, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, della convivenza tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i caratteri previsti dalla legge, di una convivenza del tutto libera, addirittura senza alcuna coabitazione. A ciascuna di queste situazioni, che pure in linea di principio possono consentire di configurare relazioni familiari, la legge attribuisce diversa valenza.¹⁴ Sotto altro riguardo, può affermarsi che ognuno è libero di scegliere su misura il vestito che maggiormente si adatta alle proprie esigenze affettive e relazionali, con diverse graduazioni di responsabilità e che ciascuno di questi modelli può succedersi nel tempo di vita della medesima persona. Infatti, qualunque sia la veste giuridica prescelta, l'interessato può unilateralmente e rapidamente sciogliere il vincolo giuridico di coppia o cessare la convivenza.¹⁵

Tutto ciò era impensabile fino a qualche decennio fa e stravolge il contesto tradizionale.

3. Stabilità della filiazione e nuova dimensione sociale dei rapporti familiari

Alla precarizzazione della relazione di coppia l'ordinamento contrappone una forte consolidazione dei legami genitoriali, attuata attraverso strumenti giuridici che in passato non avevano ragione di esistere perché la tutela si indirizzava prioritariamente in favore dei figli legittimi cosicché i legami verticali erano garantiti dalla indissolubilità del vincolo matrimoniale.¹⁶

La stabilità del legame di filiazione si presenta sotto un duplice aspetto: in primo luogo con l'affermazione dello stato unico di figlio e con riguardo alle regole che, nell'ambito della crisi del rapporto genitoriale, disciplinano l'affidamento dei

¹² SESTA, Michele, «Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare», in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. II, t. 1, Giuffrè, Milano, 1998, p. 811 ss.

¹³ LENTI, Leonardo, «Note critiche in tema di interesse del minore», in *Riv. dir. civ.*, 1, 2016, p. 87 ss. e specialmente 93; BERNAND, Younes, «Le temporalité dans le droit...», *cit.*, p. 862.

¹⁴ Sul punto, cfr. SESTA, Michele, «La famiglia tra funzione sociale...», *cit.*, p. 576.

¹⁵ LUPOI, Michele Angelo, in Enrico Gabrielli (diretto da), «Commentario del codice civile, sub artt. 4», L. 1 dicembre 1970, n. 878, in Giovanni Di Rosa (a cura di), *Della famiglia*, III, 2^{ed.}, UTET, Torino, 2018, p. 68 ss.; GRIMALDI, Ida, «Crisi della famiglia. Separazione, divorzio, divorzio breve», in Giuseppe Cassano, Giacomo Oberto (a cura di), *La famiglia in crisi*, WKI-CEDAM, Padova, 2016, p. 253 ss.; RIMINI, Carlo, *Il nuovo divorzio*, in Antonio Cicu, Francesco Messineo e Luigi Mengoni (già diretto da), Piero Schlesinger (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, II - *La crisi della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 26 ss.

¹⁶ In argomento, si v. SESTA, Michele, «La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali», *cit.*, p. 578.

figli minori e gli obblighi nei confronti dei figli maggiorenni non autosufficienti; in secondo luogo con riguardo al regime delle azioni di stato. Sotto il primo profilo occorre ricordare che, a seguito di una riforma importante intervenuta nel 2012, in Italia è stato affermato lo stato unico di figlio, il che significa che la condizione giuridica del nato è indipendente dalla sussistenza del vincolo matrimoniale tra i genitori, ed è uguale per tutti.¹⁷ Il dato di maggior interesse è che non solo è venuta meno la secolare differenziazione tra figli legittimi e figli naturali o illegittimi, ma che il matrimonio non è più la porta d'ingresso nella famiglia, in quanto il vincolo di parentela si instaura ora tra discendenti e collaterali indipendentemente dal rapporto giuridico matrimoniale dei genitori. In altri termini la parentela non è più condizionata dal matrimonio, che ha così perduto una delle sue più essenziali finalità e si è ridotto a mero orpello della relazione di coppia.¹⁸

Alla unicità dello stato di figlio corrisponde quella delle regole che governano la responsabilità genitoriale, che sono le stesse sia nel caso di matrimonio o convivenza dei genitori sia nel caso in cui essi vivano separatamente e non coabitino.¹⁹ In ogni caso i genitori esercitano la responsabilità di comune accordo e quindi devono relazionarsi tra loro per assumere le più opportune decisioni nei confronti dei figli, allo stesso modo in cui farebbero se coabitassero tutti assieme. Insomma, si è genitori per sempre e in coppia, non *uti singuli*. In maniera corrispondente, il figlio è titolare del diritto alla bi-genitorialità, cioè a mantenere identici rapporti con i genitori e con i parenti dei relativi rami anche quando questi non convivano. Sembra dunque che il legislatore esiga che le relazioni familiari come tali non risentano del venir meno o addirittura dell'insussistenza *ab origine* della relazione orizzontale, che nel passato regime costituiva la base della famiglia.

Come dicevamo, c'è un altro profilo che testimonia l'intento del legislatore di rendere indissolubile il regime di filiazione, come è dato trarre dalla disciplina delle azioni di stato. Occorre ricordare che prima delle riforme degli anni '70 vigeva il principio del *favor legitimitatis*, che consentiva l'azione di disconoscimento della paternità solo al marito della donna coniugata, che doveva esercitarla subito dopo la nascita del figlio, in un termine molto breve.²⁰

Questo da un lato garantiva la stabilità della famiglia, dall'altro sacrificava l'emersione della verità della filiazione.²¹ Per contro l'azione di impugnativa del

¹⁷ Sullo stato unico di figlio, si v. BIANCA, Mirzia, «L'unicità dello stato di figlio», in Cesare Massimo Bianca (a cura di), *La riforma della filiazione*, WKI-CEDAM, Milano-Padova, 2015, p. 3 ss.; BIANCA, Cesare Massimo, «La riforma della filiazione», ne *Le nuove Leggi civili commentate*, 2, 2013, p. 437 ss.; ID., «La legge italiana conosce solo i figli», in *Riv. dir. civ.*, 1, 2013, p. 1 ss.; SESTA, Michele, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 251 ss.

¹⁸ Cfr. SESTA, Michele *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 457 s.; ID., s.v. «Filiazione (diritto civile)», in *Enc. dir.*, *Annali*, VIII, Giuffrè, Milano, 2015, p. 448.

¹⁹ In argomento, LENTI, Leonardo, «Responsabilità genitoriale», in Leonardo Lenti, Manuela Mantovani (a cura di), *Il nuovo diritto della filiazione*, in Paolo Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia, Le riforme*, II, Giuffrè, Milano, 2019, p. 375 ss.; LA ROSA, Elena, «Commento sub art. 316, c.c.», in Giovanni Di Rosa (ed.), *Della famiglia*, II, in Enrico Gabrielli (diretto da), *Commentario del codice civile*, UTET, Torino, 2018, p. 613 ss.; AL MUREDEN, Enrico, «Commento sub art. 316 c.c.», in Michele Sesta (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, cit., p. 1664 ss.; SESTA, Michele e Alessandra ARCERI, «La responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli», in Antonio Cicu, Francesco Messineo e Luigi Mengoni (già diretto da), Pietro Schlesinger (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale, La crisi della famiglia*, III, Giuffrè, Milano, 2016, p. 12 ss.

²⁰ CICU, Antonio, «La filiazione», II ed., in Filippo Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, vol. III, t. 2, UTET, Torino, 1969, p. 88 ss., p. 103 ss., particolarmente 133 e 142 ss.

²¹ Sulla dialettica tra verità legale e verità biologica, cfr. GEBLER, Marie-Joseph *Le droit français de la filiation et la vérité*, Paris, 1970, *passim*.

riconoscimento del figlio naturale era esperibile da chiunque ne avesse interesse ed era imprescrittibile proprio in considerazione del fatto che in quell'epoca il figlio concepito fuori del matrimonio non disponeva di una piena e incondizionata tutela e soprattutto non era giuridicamente inserito in una rete di rapporti familiari.²² Con le riforme degli anni '70 ha trovato ingresso il principio della verità nei rapporti di filiazione, che poteva essere accertata in un tempo anche molto successivo a quello della nascita.²³ Occorre anche ricordare che il principio della verità poteva finalmente imporsi grazie ai progressi delle scienze mediche che, a partire dagli anni Ottanta, consentivano di escludere e di determinare con certezza la paternità del nato.

Più di recente -in Italia dal 2012- il legislatore ha posto nuovi limiti temporali all'accertamento della verità, limiti ai quali non soggiace il figlio, per il quale le relative azioni sono imprescrittibili. Per gli altri, e particolarmente per colui che viene indicato come padre, decorsi cinque anni dalla nascita, l'azione non è più esperibile e lo stato di filiazione si consolida anche se si sia scoperto che esso non corrisponde alla verità biologica della procreazione *ex artt.* 244, comma 5, c.c. e 263, comma 4, prima parte, c.c.

Conclusivamente, l'elemento biologico ha perduto quella primaria rilevanza che gli era stata attribuita ed è stato sostituito dall'interesse del figlio -che però riflette anche un interesse più ampio dell'intera società- alla stabilità della relazione con chi risulti suo genitore affinché venga ad essere accudito e mantenuto nel contesto relazionale in cui è rimasto collocato per un tempo significativo.²⁴ Come è stato scritto, una tale evoluzione si è resa necessaria «in tempi ove le famiglie sono fragili, le coppie instabili e i minori sballottati da una famiglia all'altra. Il minore, come detto, rimane uno degli ultimi elementi di stabilità a partire dal quale il legislatore potrà ricostruire il diritto della famiglia».²⁵

In questo quadro si collocano le nuove genitorialità ed in particolare la genitorialità sociale e intenzionale connesse a ricomposizioni familiari o a procreazione medicalmente assistita attuate da persone di diverso o dello stesso sesso.

4. Bigenitorialità e genitorialità sociale nella famiglia ricomposta

Si possono prendere le mosse dalla famiglia ricomposta,²⁶ termine che evoca una pluralità di formazioni familiari la cui caratteristica comune può essere individuata nell'unione tra persone che abbiano già formato un nucleo familiare precedente. È possibile, pertanto, includere in questa categoria non solo l'ipotesi della famiglia ricomposta da vedovi, da persone reduci da un divorzio, ma anche quella dell'unione tra persone che abbiano già vissuto un'esperienza familiare fondata sulla convivenza, o che, pur non avendo mai formato una coppia unita, abbiano generato un figlio con una persona diversa dal nuovo *partner* o, ancora, ricorrendo come singoli alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Questo

²² CICU, Antonio, *op. ult. cit.*, p. 159.

²³ SESTA, Michele, *s.v. Filiazione (diritto civile)*, *cit.*, p. 446.

²⁴ *Ibidem*, p. 447.

²⁵ MALAURIE, Philippe e Laurent AYNES, in Philippe Malaurie, Hugues Fulchron (a cura di), *La famille*, IV ed., LGDJ, Paris, 2011, p. 382.

²⁶ Sulla famiglia ricomposta o ricostituita, RESCIGNO, Pietro, «Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche», in *Famiglia*, 1, 2002, p. 1 ss.; BILO', Giovanna, *Famiglia ricostituita*, in SESTA, Michele (a cura di), *Codice della famiglia*, III ed., Milano, 2015, 2394; BILO', Giovanna, «I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell'ordinamento inglese», in *Famiglia*, 4, 2004, p. 831; BUZZELLI, Dario, *La famiglia «composita». Un'indagine sistematica sulla famiglia ricomposta: i neo coniugi o conviventi, i figli nati da precedenti relazioni e i loro rapporti*, Jovene, Napoli, 2012.

articolato quadro di ipotesi si amplia ulteriormente a seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che, dando attuazione alle ripetute esortazioni della giurisprudenza della CEDU ed interna, ha introdotto una disciplina delle unioni tra persone dello stesso sesso e delle convivenze sia tra persone di sesso diverso che tra persone dello stesso sesso. Non vi è dubbio, quindi, che il processo di transizione da un modello di famiglia fondata sul matrimonio indissolubile alla pluralità di modelli familiari registri un ulteriore momento di espansione. Infatti, accanto alla famiglia destrutturata -formata da persone separate o divorziate, ma nondimeno unite dalla presenza di figli comuni-, alla famiglia di fatto fondata su di un'unione non matrimoniale, si aggiungono oggi nuovi modelli di famiglia quale quella fondata su una convivenza rilevante ai sensi del comma 36 della l. n. 76/2016 e quella costituita da persone dello stesso sesso unite civilmente.

Proprio l'espandersi delle tipologie di relazione di coppia alle quali il diritto riconosce forme di tutela differenziate costituisce il presupposto affinché possa ampliarsi l'ambito di rilevanza della cosiddetta famiglia ricomposta e la possibilità di una sovrapposizione nel tempo di nuclei familiari diversi formati da soggetti che provengono da una precedente esperienza familiare.

Questa particolare prospettiva pone in rilievo una difficoltà dell'interprete a ricondurre le complesse fattispecie che di volta in volta si configurano entro il disposto di norme quasi sempre concepite in funzione del paradigma della famiglia fondata sul matrimonio e nelle quali la crisi del rapporto di coppia era considerata nella sola prospettiva del divorzio. Una prospettiva che, invero, non sembra tenere nella dovuta considerazione quella fase nella quale, sempre più di frequente, si assiste alla formazione di nuovi nuclei familiari e quindi alla creazione di trame di rapporti assai più complesse di quelle assunte come modello da una disciplina che, seppure con periodiche revisioni, è giunta pressoché inalterata dagli anni Settanta ad oggi. Considerazioni analoghe possono essere ripetute anche con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati che, in larga misura, appaiono ancorati a soluzioni concepite in funzione del paradigma della famiglia unita nella quale la crisi della coppia può sfociare al più nel divorzio, ma non nella ricomposizione di nuclei familiari nuovi successivamente alla rottura del primo.

Nel quadro completamente descritto la prospettiva della famiglia ricomposta impone all'interprete l'esigenza di riconsiderare assunti consolidati con riferimento alle regole che governano il rapporto tra genitori e figli per quanto concerne gli aspetti personali ed economici.

Si pone, anzitutto, un problema generale con riferimento alla definizione dell'interesse del minore laddove, a seguito della ricomposizione di nuclei familiari successivi alla rottura dell'unione che legava i genitori, egli si trovi a vivere all'interno di una trama di rapporti complessa nella quale acquista una crescente rilevanza il ruolo del genitore sociale. La presenza di nuovi partner dei genitori, infatti, determina inevitabilmente un mutamento della struttura della compagine familiare, delle consuetudini, dei ritmi e delle modalità di organizzazione del tempo che inevitabilmente si riflettono sull'esistenza quotidiana del minore. All'interno della famiglia ricomposta, pertanto, il ruolo del genitore biologico e quello del genitore sociale finiscono inevitabilmente per coesistere ponendo delicate questioni sia con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, sia per quanto concerne i profili del mantenimento e della assegnazione della casa familiare.

5. L'interesse del minore nella famiglia ricomposta tra diritto alla bigenitorialità e «genitorialità sociale»

A cinquant'anni dall'introduzione del divorzio l'analisi della rottura del vincolo coniugale nella prospettiva del rapporto genitori-figli costituisce uno dei più efficaci punti di osservazione dell'evoluzione del concetto di interesse del minore alla luce della pluralità e complessità dei modelli familiari.

Fino agli inizi degli anni Duemila la visione dei rapporti tra genitori e figli successivamente alla crisi e alla rottura del vincolo coniugale si è fondata sul presupposto inespresso di una conflittualità tra i genitori che ha suggerito l'introduzione ed il mantenimento della regola dell'affidamento esclusivo come principio generale.²⁷

Il superamento di questa visione ed il definitivo conseguimento di una piena consapevolezza circa la necessità di attuare l'interesse del minore alla continuità dei vincoli affettivi instaurati con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale costituisce il fondamento della disciplina introdotta dalla L. n. 54/2006, che ha attribuito fondamentale preminenza al principio della bigenitorialità.²⁸

La complessità dell'attuale panorama delle relazioni familiari, tuttavia, fa emergere che la garanzia del diritto del minore alla conservazione anche successivamente al divorzio dei genitori dei legami affettivi che cementavano il nucleo familiare unito può talvolta entrare in un rapporto di potenziale sovrapposizione ed interferenza rispetto all'esigenza di attribuire rilievo a significativi legami affettivi che tendono a formarsi nell'ambito della famiglia ricomposta tra un minore ed il nuovo *partner* del genitore biologico. Proprio sotto questo profilo il crescente affermarsi della rilevanza assunta dalla cosiddetta famiglia degli affetti e, in particolare, dalla figura del genitore sociale impone di considerare il rapporto tra quest'ultimo ed il minore in una prospettiva assai più complessa nella quale diritto alla bigenitorialità si svolge sovente nel contesto di una famiglia ricomposta ove l'intrecciarsi di plurimi legami affettivi postula un «adattamento» del diritto vigente che consenta di attribuire rilievo a rapporti fondati su relazioni meramente affettive mediante l'individuazione di regole funzionali ad istituire una gerarchia tra ruoli genitoriali inevitabilmente destinati a sovrapporsi.

In altri termini dalla presenza di un terzo genitore nel fascio di rapporti familiari che convergono intorno al minore scaturisce una dimensione delle relazioni insolita

²⁷ Lo spirito della disciplina dell'affidamento esclusivo vigente sino alla riforma operata con la L. n. 54/2006 è stato incisivamente sottolineato laddove si è osservato che «il mantenere vivo un costante rapporto fra i figli e il genitore non affidatario può essere più necessario che opportuno, perché l'equilibrato sviluppo della prole ha bisogno, di regola, dell'apporto dei due genitori», FINOCCHIARO, Francesco, *Del matrimonio*, II, in Antonio Scialoja, Giuseppe Branca, Francesco Galgano (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1993, p. 402. Una simile visione, del resto, riecheggia nella giurisprudenza di legittimità che, seppur consapevole della fondamentale rilevanza della continuità delle relazioni tra genitori e figlio, ancora agli inizi degli anni Novanta sottolineava che «con i provvedimenti riguardanti il figlio minore, il giudice della separazione dei coniugi deve assicurare, in difetto di specifiche situazioni ostative, il mantenimento dei rapporti tra il figlio medesimo ed il genitore non affidatario, nei limiti compatibili con la frattura del nucleo familiare» (Cass. Civ. 9 agosto 1990, n. 8109, in *OneLegale.it*).

²⁸ ARCERI, Alessandra, in Michele Sesta e Alessandra Arceri, *La responsabilità genitoriale...*, cit., p. 159; STEFANELLI, Stefania, in Andrea Sassi, Francesca Scaglione e Stefania Stefanelli, *Filiazione e minori*, II ed., in Rodolfo Sacco (diretto da), *Trattato di diritto civile*, UTET, Torino, 2018, p. 619; LENTI, Leonardo, «Responsabilità genitoriale», cit., p. 375 ss.

e complessa rispetto alla quale l'interprete e il legislatore sono necessariamente chiamati ad elaborare soluzioni capaci di attuare l'interesse del minore in un contesto che presenta elementi di assoluta novità rispetto a quelli che hanno costituito i paradigmi in funzione dei quali si è formato l'attuale diritto vivente.

La rilevanza assunta dalla relazione instauratasi tra un minore ed il nuovo *partner* del genitore biologico può manifestarsi secondo modalità differenziate. L'analisi della casistica giurisprudenziale testimonia sotto questo profilo la crescente rilevanza che nell'ambito della cosiddetta famiglia ricomposta hanno gradualmente assunto sia l'adozione dell'art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983²⁹, sia l'adozione del maggiorenne *ex art.* 291 c.c.

²⁹ Il problema di riconoscere una posizione giuridicamente rilevante al *partner* non legato da un rapporto biologico con il figlio generato dall'altro ha assunto rilievo, anzitutto, nell'orientamento che ha fornito un'interpretazione dell'*ex art.* 44, comma 1, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184 funzionale a consentire la c.d. *stepchild adoption* nell'ambito delle coppie omogenitoriali (Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12962, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 9, pp. 1213 ss., con nota di FERRANDO, Gilda, «Il problema dell'adozione del figlio del partner commento a prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 12962 del 2016»; in *Fam. e dir.*, 2016, 11, pp. 1025 ss., con nota di VERONESI, Silvia, «La Corte di cassazione si pronuncia sulla *stepchild adoption*». In senso contrario Trib. Min. Milano 17 e 20 ottobre 2017, con nota critica di FERRANDO, Gilda, «A Milano l'adozione del figlio del partner non si può fare», in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 1, 171 ss.). Le molteplici pronunce in materia di genitorialità sociale riferite a coppie omogenitoriali fanno emergere una convergenza laddove la cosiddetta *stepchild adoption* (*ex art.* 44, comma 1, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184) viene individuata come soluzione capace di realizzare un ragionevole contemperamento tra l'esigenza di ribadire la preminente rilevanza della genitorialità fondata su legami biologici o adottivi e quella di salvaguardare la continuità delle relazioni affettive instaurate dal minore con un adulto che abbia deciso di assumere compiti di cura corrispondenti a quelli svolti dal genitore biologico o adottivo. Così la decisione delle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 8 maggio 2019, n. 12193, in *Fam. e dir.*, 2019, 6, pp. 653 ss., con nota di DOGLIOTTI, Massimo, «Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri» e di FERRANDO, Gilda, «Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento»; in *Dir. fam. e pers.*, 2019, 3, pp. 1098 ss., con nota di SPADAFORA, Antonello, «Procreare *semper licet?*»; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, II, 4, pp. 741 ss., con nota di SALANITRO, Ugo, «Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità»; in *Corr. giur.*, 2019, 1198, 10, con nota di GIUNCHEDI, Diletta, «Maternità surrogata tra ordine pubblico, *favor veritatis* e dignità della maternità») che ha escluso la possibilità di riconoscere un rapporto di piena genitorialità ad una coppia omosessuale maschile che abbia dato vita ad un progetto genitoriale ricorrendo alla tecnica della maternità surrogata ha indicato proprio nella *stepchild adoption* (*ex art.* 44, comma 1, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184) lo strumento attraverso il quale assicurare in una simile fattispecie una tutela ed una continuità al rapporto genitoriale instaurato tra il minore e l'adulto cementato solamente dalla volontà di quest'ultimo di assumere le responsabilità corrispondenti a quelle del genitore. Una simile lettura risulta ulteriormente confermata dalla decisione con la quale la Corte costituzionale ha confermato la legittimità delle previsioni che escludono la piena efficacia di un atto di nascita straniero recante l'indicazione della maternità anche in capo al cosiddetto genitore intenzionale (Corte cost. 4 novembre 2020, n. 230). Un'ulteriore conferma circa l'idoneità dell'adozione *ex art.* 44, comma 1, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184 a realizzare un adeguato contemperamento tra i principi fondamentali che regolano la procreazione medicalmente assistita in Italia ed il diritto del minore a conservare rapporti significativi con un adulto a lui legato da vincoli affettivi che abbia intrapreso un progetto genitoriale non conforme ai dettami L. n. 40 del 2004 si rinviene anche nella decisione con la quale la Corte costituzionale ha confermato la persistente ragionevolezza e legittimità delle disposizioni che riservano l'accesso alla procreazione medicalmente assistita a «due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile» (Corte cost. 22 ottobre 2019, n. 221, in *Corr. giur.*, 2019, 12, 1460, con nota di RECINTO, Giuseppe, «La legittimità del divieto per le coppie *same sex* di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche «chiarimento» ed alcuni «revirement»). L'affermazione di un simile principio -ulteriormente ribadito da una successiva decisione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata con riferimento alla norma che impedisce la formazione di un atto di nascita recante il riconoscimento del figlio, cittadino straniero, da parte di due madri (Corte cost. 21 dicembre 2019, n. 237, in *Fam. e dir.*, 2020, 3, 325,

Invero la fondamentale rilevanza delle relazioni affettive che si instaurano nell'ambito della cosiddetta genitorialità sociale si manifesta anche al di fuori delle fattispecie nelle quali essa sia formalizzata riconducendo il rapporto tra adulto e minore entro le forme dell'adozione appena menzionate. Così, anche nelle ipotesi in cui la costituzione di un rapporto adottivo non abbia luogo in ragione dell'inerzia del genitore sociale o dell'opposizione di uno dei genitori biologici, la relazione affettiva che di fatto si instaura tra l'adulto ed il minore continua in ogni caso ad assumere una rilevanza che emerge sotto il profilo del risarcimento conseguente alla perdita del «congiunto»³⁰ o, ancora, per quanto concerne la tutela della continuità affettiva nell'ipotesi in cui vada in crisi e venga meno il vincolo che unisce il genitore sociale al genitore biologico del minore.³¹

Proprio in ragione della rilevanza assunta dalla relazione di fatto che lega il genitore sociale al minore si manifesta la necessità di ampliare i confini entro cui è

con nota di SESTA, Michele, «L'atto di nascita del cittadino straniero nato in Italia non può recare il riconoscimento di due madri»- non conduce ad obliterare l'esigenza di salvaguardare l'interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate con l'adulto che abbia intenzionalmente assunto la veste di genitore; esigenza che, precisa la Consulta, è pienamente meritevole di una tutela che può essere efficacemente assolta ricorrendo alla «adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184».

³⁰ Sotto un diverso profilo la rilevanza assunta dal cosiddetto «genitore sociale» ha trovato un'ulteriore conferma in una decisione di legittimità nella quale è stato ammesso il diritto di quest'ultimo a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della perdita del figlio del partner (Cass. Civ. 21 aprile 2016, n. 8037, in *Danno e resp.*, 2017, 1, 30, con nota di GARIBOTTI, Alessandra, *Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nell'ambito delle famiglie ricostituite e nelle unioni civili* ed in *Fam. e dir.*, 2017, 2, 329, con nota di LA BATTAGLIA, Luigi, «Il danno non patrimoniale da perdita del figlio del «partner»: variazioni sul tema della famiglia di fatto»). Sul punto CINQUE, Maddalena, «Quale statuto per il 'genitore sociale'?, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2017, p. 1480 -all'esito di una perspicua analisi della giurisprudenza che riconosce il diritto del genitore sociale al risarcimento del danno subito per la perdita del minore con il quale aveva instaurato un significativo legame affettivo- osserva che detto risarcimento può cumularsi con quello riconosciuto alla coppia dei genitori biologici dando così vita ad una situazione complessa nella quale alla morte del minore consegue un danno che interessa una pluralità di adulti a quest'ultimo legati da vincoli biologici (genitori biologici) e di natura meramente affettiva (genitore sociale).

³¹ La meritevolezza di tutela della continuità del rapporto che lega un minore al partner del suo genitore biologico è stata sottolineata da Corte cost. 20 ottobre 2016, n. 225, in *Fam. e dir.*, 2017, 3, p. 305 ss., con nota di TOMMASEO, Ferruccio, «La Corte Costituzionale sulla tutela degli affetti extrafamiliari del fanciullo», che, muovendo da una fattispecie nella quale si era instaurata una significativa relazione tra una minore e la compagna della madre biologica di quest'ultima, ha precisato, da una parte, che la previsione contenuta nell'art. 337-ter c.c. dev'essere riferita esclusivamente alla coppia dei genitori biologici, ma ha sottolineato, dall'altra, l'esigenza di salvaguardare le significative relazioni affettive instauratesi tra un minore e colui che abbia volontariamente assunto nei suoi confronti la veste di genitore sociale. La fondamentale rilevanza assunta dall'esigenza di salvaguardare i rapporti affettivi instaurati dal minore anche in assenza di un legame biologico con l'adulto che abbia assunto il ruolo genitoriale è stata ulteriormente sottolineata in una decisione di merito successiva (Trib. Como 13 marzo 2019, in *Fam. e dir.*, 2020, 2, pp. 137 ss., con nota di DIQUATTRO, Carolina, «La tutela del diritto del minore alla conservazione del rapporto affettivo con il genitore sociale») che riferendosi al rapporto tra una minore e colui che le indagini biologiche avevano escluso essere il padre, ha posto in evidenza la primaria rilevanza dell'interesse del minore «alla stabilità dei legami affettivi con le persone con cui hanno vissuto e alla costituzione di uno stato giuridico corrispondente al rapporto di fatto consolidato nel tempo». Sul punto si vedano QUADRI, Enrico, «La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze», in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2017, p. 566 ss., in part. p. 569; CAROTA, Lisia, «La tutela del rapporto con il genitore sociale nelle coppie dello stesso sesso e l'orientamento della corte costituzionale sulle modalità di conservazione del rapporto una volta cessata la convivenza», in *Nuove leggi civ.*, 1, 2018, p. 270; CINQUE, Maddalena, «Quale statuto per il 'genitore sociale'?, *cit.*, p. 1475.

stata tradizionalmente attuata la condivisione della responsabilità genitoriale. In questo senso una significativa indicazione si rinviene nelle soluzioni adottate nell'ordinamento francese in cui sono contemplate forme di condivisione dei poteri tra genitore biologico e genitore di fatto che consentono di plasmare l'esercizio della responsabilità genitoriale secondo modalità conformi alla complessità che caratterizza l'attuale panorama delle relazioni familiari.³²

L'opportunità di prevedere soluzioni analoghe nell'ordinamento italiano – posta in luce da un disegno di legge risalente al 2014³³ – è riaffiorata in un provvedimento di merito nel quale il Tribunale ha confermato la conformità all'interesse del minore di un accordo intercorso tra genitori biologici e genitore sociale in virtù del quale è stato riconosciuto a quest'ultimo il diritto a continuare a mantenere rapporti significativi con il minore a suo tempo adottato mediante la previsione contenuta nell'art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, nonché il dovere di contribuire parzialmente al suo mantenimento.³⁴

In definitiva l'esigenza di osservare in una prospettiva sistematica le molteplici questioni scaturite dalla presenza di un genitore sociale nell'ambito delle relazioni che fanno capo al minore appare ormai indifferibile. In quest'ottica l'interprete, nel ricostruire un quadro normativo e giurisprudenziale particolarmente frastagliato, è inevitabilmente chiamato ad elaborare soluzioni che riempiano di contenuto il principio generale dell'interesse del minore valorizzando la complessità e la flessibilità che caratterizzano l'attuale panorama delle relazioni familiari.

6. Famiglia ricomposta ed interesse del minore alla permanenza nella casa familiare

La complessità delle relazioni che caratterizzano le cosiddette famiglie ricomposte può essere colta anche nel particolare angolo visuale dell'assegnazione della casa familiare.

Concentrando l'attenzione sui profili attinenti alla crisi del rapporto, occorre anzitutto considerare l'ipotesi in cui si tratti di decidere riguardo al diritto alla permanenza nella casa familiare di soggetti minori o non autosufficienti che siano figli di uno soltanto dei coniugi.³⁵ Riguardo a questa fattispecie la Suprema Corte ha chiarito che il sacrificio del genitore proprietario è giustificato solo laddove l'esigenza di garantire il diritto del figlio alla permanenza nella casa familiare sia riferito al figlio comune della coppia. Pertanto qualora il problema dell'assegnazione della casa familiare si ponga nel contesto di una famiglia composta dai coniugi e

³² Sul punto QUADRI, Enrico, «La tutela del minore nelle unioni...», *cit.*, p. 568, il quale si sofferma sulle soluzioni adottate al fine di consentire l'instaurazione di una «vera e propria co-genitorialità da parte della coppia di persone dello stesso sesso»; CINQUE, Maddalena, «Quale statuto per il 'genitore sociale'?', *cit.*, p. 1500, che sottolinea la particolare idoneità della *délégation classique* e della *délégation-partage* del diritto francese quali strumenti capaci di attribuire una rilevanza giuridica al ruolo assunto dal genitore sociale.

³³ In questo senso si veda il d.d.l. recante *Modifiche al codice civile in materia di delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale* presentato il 19 febbraio 2014 nel corso della XVII Legislatura dai Senatori Manconi, Palermo e Lo Giudice, i cui contenuti sono esaustivamente illustrati in CINQUE, Maddalena, «Quale statuto per il 'genitore sociale'?', *cit.*, 1498.

³⁴ Trib. Padova 6 giugno 2018, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, pp. 1795 ss., con nota di BUGETTI, Maria Novella, «L'affidamento del figlio adottato ai sensi dell'art 44 lett. b) l. n. 184/1983 a seguito del divorzio».

³⁵ Sulle peculiari questioni che emergono in materia di casa familiare in presenza di nuclei familiari «ricomposti», IPPOLITI MARTINI, Carlotta, «I riflessi economici dell'assegnazione della casa familiare», in Enrico Al Mureden, Riccardo Rovatti (a cura di), *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 146.

dal figlio che il coniuge non proprietario aveva avuto da una precedente relazione è escluso il diritto di quest'ultimo alla permanenza nell'immobile di cui è proprietario il solo «genitore sociale».³⁶ Invero la particolare prospettiva della crisi dell'unione nella quale siano presenti figli di uno dei *partner* che abbiano instaurato un significativo legame con l'altro mette in luce l'esigenza di una revisione dell'orientamento secondo cui l'assegnazione della casa familiare può essere disposta solo a favore dei figli biologici (o adottivi) del proprietario. Questo orientamento appare, infatti, difficilmente conciliabile con le decisioni che –valorizzando i vincoli affettivi instauratisi tra genitore sociale e figlio del *partner*– hanno attribuito rilievo alla cosiddetta «famiglia degli affetti» riconoscendo l'ammissibilità della *stepchild adoption*³⁷ e con quelle che hanno sottolineato la necessità di colmare una lacuna laddove l'ordinamento non prevede uno strumento che assicuri al «genitore sociale» una continuità del rapporto con il figlio del *partner* successivamente alla crisi dell'unione di coppia.³⁸ A ben vedere quegli stessi vincoli affettivi che possono giustificare il ricorso alla *stepchild adoption* o il riconoscimento della meritevolezza di tutela della continuità affettiva sembrano riecheggiare negli orientamenti in materia di assegnazione della casa familiare che sottolineano l'assunto ormai consolidato secondo cui «occorre considerare in via prioritaria l'interesse della prole a permanere nell'habitat domestico» inteso dalla S.C. come «il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare».³⁹ In quest'ottica, operando una lettura sistematica dell'orientamento che valorizza i legami affettivi instauratisi tra soggetti che vivono un'esperienza familiare pur non essendo legati da un vincolo biologico e quello che vede la casa familiare come il luogo nel quale gli affetti familiari si sviluppano e si radicano, sembra possibile affermare che non si possa far dipendere il diritto del minore a «permanere nell'habitat domestico» dalla presenza di un mero legame biologico con il proprietario, pretermettendo in linea di principio la rilevanza di eventuali legami affettivi che da soli siano capaci di giustificare la sussistenza di un interesse del minore alla permanenza nel luogo in cui la vita familiare si è radicata.

Un diverso genere di problemi si pone con riferimento alla fattispecie in cui il coniuge non proprietario al quale sia stata assegnata la casa familiare in quanto genitore prevalentemente convivente con il figlio minore instauri una nuova convivenza o contragga un nuovo matrimonio. In un primo momento, a seguito dell'introduzione della disciplina della casa familiare regolata dall'art. 155-*quater* c.c. (oggi collocata nell'art. 337-*sexies* c.c.), la posizione del coniuge non proprietario apparve indebitamente compromessa. Infatti la previsione secondo cui «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio» avrebbe potuto condurre a determinare l'automatico estinguersi

³⁶ Cass. Civ. 2 ottobre 2007, n. 20688, in *Fam. e dir.*, 2008, 2, pp. 243 ss., con nota di MARCHIONDELLI, Laura Anna, *L'assegnazione della casa familiare quale strumento di tutela dei figli di entrambi i coniugi*; in senso analogo Cass. Civ. 15 settembre 2011, n. 18863, in *OneLegale.it*

³⁷ Cfr. *retro* Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12962, *cit.*

³⁸ Cfr. *retro* Corte cost. 5 ottobre 2016, n. 225, *cit.*

³⁹ Cass. Civ. 8 giugno 2012, n. 9371; Cass. Civ. 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. Civ. 15 settembre 2011, n. 18863, tutte in *OneLegale.it*. ROMA, Umberto, «L'assegnazione della casa familiare», in Michele Sesta e Alessandra Arceri (a cura di), *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, Torino, 2012, p. 152; ARCERI, Alessandra in SESTA, Michele, ARCERI, Alessandra, *La responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli*, *cit.*, p. 395; ARCERI, Alessandra, «Sub art. 337-*sexies* c.c.», in Michele Sesta (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 1829.

del diritto ad abitare nella casa familiare –conseguito in ragione della convivenza con i figli– laddove avesse avuto luogo l'instaurazione di una nuova convivenza o la celebrazione di un nuovo matrimonio; e ciò in ragione di una variabile del tutto indipendente rispetto al criterio dell'interesse dei figli.⁴⁰

Sulla base di questi rilievi sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale⁴¹ riferite alla previsione di un automatismo in ragione del quale il provvedimento di assegnazione della casa familiare poteva venire meno a seguito del matrimonio contratto dal genitore che ne beneficiava o dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una nuova convivenza; automatismo che finiva per porre in secondo piano ed obliterare il preminente interesse dei figli alla conservazione della stabilità della residenza familiare. Tali considerazioni, invero, hanno trovato parziale riconoscimento nella successiva pronuncia interpretativa di rigetto con la quale la Corte costituzionale⁴² ha chiarito che il disposto dell'art. 155-*quater* c.c. (oggi art. 337-*sexies* c.c.) deve essere letto nel senso che l'instaurazione di una nuova convivenza o il nuovo matrimonio contratto da parte del genitore beneficiario del provvedimento di assegnazione comporta necessariamente una rinnovata valutazione dell'interesse dei figli riferita alla nuova situazione. Pertanto la modifica del provvedimento di assegnazione originario presuppone necessariamente una simile valutazione e non può scaturire automaticamente dalla sola circostanza delle seconde nozze del coniuge assegnatario o dall'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza *more uxorio*.

L'analisi della casistica giurisprudenziale successiva alla decisione della Corte costituzionale fa emergere, invero, la presenza di soluzioni che possono destare perplessità: infatti, pur muovendo da un condivisibile intento di tutela dell'interesse del minore alla permanenza nella casa familiare, la S.C. talvolta giunge a soluzioni che sembrano comprimere in modo eccessivo la posizione del coniuge proprietario. Questa situazione ricorre, ad esempio, laddove è stato affermato il diritto alla permanenza nella casa familiare di proprietà dell'altro coniuge anche successivamente all'instaurazione da parte del coniuge assegnatario di una nuova convivenza seguita poi dal passaggio a nuove nozze.⁴³

⁴⁰ La questione di legittimità costituzionale è stata risolta da Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308, in *Corr. giur.*, 2008, 12, 1663 ss., con nota DI QUADRI, Enrico, «Vicende dell'assegnazione della casa familiare e interesse dei figli»; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, pp. 1411 ss., con nota DI IRTI, Claudia, «La revoca dell'assegnazione della casa familiare: dalle critiche della dottrina al giudizio della Consulta», nel senso per cui ove l'assegnatario cessasse di abitare stabilmente nella casa familiare o convivesse con un terzo o contraesse nuovo matrimonio, non deve aver luogo l'automatica estromissione dalla casa familiare, ma la possibilità di un riesame della nuova situazione da parte del giudice.

⁴¹ Trib. Firenze 16 maggio 2007, in *Fam. e dir.*, 2007, 8-9, pp. 834 ss., con nota di PALADINI, Mauro, «Le nuove cause di estinzione dell'assegnazione della casa familiare al vaglio del giudice delle leggi»; Trib. Modena 18 aprile 2007, in *DeJure.it*

⁴² Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308, *cit.*

⁴³ Cass. Civ. 15 luglio 2014, n. 16171, in *OneLegale.it*, relativa ad una fattispecie nella quale la beneficiaria del provvedimento di assegnazione dopo aver instaurato una nuova convivenza aveva contratto matrimonio con il nuovo *partner*; Cass. Civ. 24 giugno 2013, n. 15753, in *OneLegale.it*, concernente l'instaurazione di una nuova convivenza da parte della beneficiaria del provvedimento di assegnazione. Occorre precisare, da ultimo, che gli orientamenti appena illustrati e le perplessità che essi destano debbano essere oggetto di ulteriore considerazione proprio in ragione del fatto che la L. n. 76/2016 ha ampliato il loro ambito di rilevanza anche con riferimento all'ipotesi in cui il genitore beneficiario del provvedimento di assegnazione instauri una convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 36 ss., L. n. 76/2016 oppure contraiga un'unione civile con persona dello stesso sesso.

Occorre rilevare, da ultimo, che la regola di diritto vivente elaborata dalla Corte costituzionale e costantemente applicata dalla giurisprudenza di legittimità è stata ulteriormente confermata da una decisione di merito che ha escluso la validità di un accordo con il quale i genitori prevedevano che l'instaurazione di una nuova relazione da parte di colui che beneficiava del provvedimento di assegnazione avrebbe dovuto costituire elemento capace di determinare la revoca del provvedimento di assegnazione e di ripristinare il godimento dell'immobile in capo al proprietario. Un simile automatismo, anche se introdotto mediante la concorde volontà dei genitori, è parso infatti inconciliabile con l'esigenza di operare una rinnovata valutazione dell'interesse del minore alla persistente permanenza nell'abitazione familiare anche successivamente all'intervenuta instaurazione di una nuova relazione da parte del genitore prevalentemente convivente.⁴⁴

7. Multigenitorialità e obblighi di mantenimento

La prospettiva della famiglia ricomposta fa emergere anche per quanto concerne le conseguenze economiche della rottura del matrimonio questioni particolarmente complesse che si manifestano sia nell'ambito del rapporto genitori figli, sia nel contesto della solidarietà post-coniugale e del mantenimento dell'ex coniuge economicamente debole.

Concentrando l'attenzione sul rapporto genitori-figli, si riscontra una crescente insoddisfazione con riferimento all'applicazione delle norme che pongono totalmente a carico del genitore biologico l'obbligo di mantenimento (art. 337 *ter* c.c.).

L'inserimento del figlio all'interno di un contesto familiare ricomposto nel quale colui che assolve al ruolo di genitore sociale o terzo genitore fornisce un significativo contributo economico, infatti, ha posto il problema di osservare in una prospettiva sistematica il complesso delle potenzialità economiche espresse in quell'ampia struttura di relazioni e rapporti compendiate nel concetto di famiglia ricomposta.

Sotto questo profilo riveste particolare interesse una pronuncia di legittimità nella quale è stato disposto che l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne gravante sul genitore biologico può essere ridotto laddove si riscontri il concorso al mantenimento anche da parte del «padre sociale» che, nel caso di specie, aveva formalizzato il duraturo rapporto affettivo instauratosi nel corso degli anni con le figlie della coniuge ricorrendo all'adozione di maggiorenne *ex* art. 291 c.c.⁴⁵ Sulla scorta di questa decisione sembra possibile ricavare un principio la cui applicabilità potrebbe essere estesa anche alla diversa ipotesi nella quale il terzo genitore assuma la veste di adottante del figlio minore del coniuge secondo le modalità previste dalla cd. *stepchild adoption* (art. 44, comma 1, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184). Problemi interpretativi più complessi si delineano, invece, in tutte le fattispecie nelle quali la presenza di una terza figura genitoriale che di fatto contribuisce con carattere di continuità e stabilità alle esigenze economiche del figlio del *partner* non rivesta la posizione formale di adottante. In quest'ultimo ordine di ipotesi la

⁴⁴ Trib. Palermo 29 dicembre 2016, in *DeJure.it*

⁴⁵ La sovrapposizione dei ruoli genitoriali all'interno della cosiddetta famiglia ricomposta è efficacemente rappresentata da una recente decisione (Cass. Civ. 27 marzo 2020, n. 7555, in *Fam. e dir.*, 2020, 8-9, 777, con nota di DANOVÌ, Filippo, «L'adozione di maggiorenne non estingue (ma può modificare) l'obbligo di mantenimento del genitore».

soluzione maggiormente aderente ai canoni interpretativi tradizionali potrebbe consistere nel ricondurre la condotta del terzo genitore entro la categoria dell'obbligazione naturale, con la conseguenza di non attribuirle un rilievo nemmeno per quanto concerne le possibili conseguenze che essa può riflettere sugli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori biologici.

Le questioni scaturenti dalla interferenza tra l'obbligo di mantenimento gravante sul genitore biologico e l'apporto fornito spontaneamente dal genitore sociale possono porsi in termini speculari nell'ipotesi in cui colui che formi una nuova famiglia unendosi ad una persona che abbia già figli propri provveda spontaneamente al mantenimento di questi ultimi ed intenda far valere questa situazione di fatto attribuendole l'effetto di limitare gli oneri economici scaturenti dall'obbligo di mantenere i propri figli biologici e l'ex coniuge. Con riferimento a questa fattispecie la giurisprudenza ha chiarito che l'adempimento di un'obbligazione naturale a favore dei figli del *partner* non può costituire un fattore capace di giustificare una limitazione dell'assegno divorzile dovuto all'ex coniuge;⁴⁶ questa conclusione può essere ripetuta, a maggior ragione, con riferimento al diritto dei figli dell'onerato, che, in questa particolare ipotesi, deve essere inderogabilmente garantito.

Queste considerazioni, tuttavia, non possono essere estese all'ipotesi in cui l'ex coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno post-matrimoniale forni successivamente al divorzio una famiglia nella quale siano presenti suoi nuovi figli biologici. Proprio muovendo da questa fattispecie, infatti, la giurisprudenza – valorizzando i principi sovranazionali dai quali può evincersi l'esistenza di un diritto a formare una seconda famiglia – ha posto, ben prima del *revirement* operato nel 2017, le basi per il superamento dell'orientamento consolidato che fondava sul tenore di vita coniugale il presupposto per l'attribuzione e la commisurazione dell'assegno divorzile. In questa prospettiva si inquadrano le decisioni nelle quali, muovendo dalla prospettiva delle famiglie che si sovrappongono nel tempo, la spettanza e l'entità del mantenimento dovuto alla parte economicamente debole sono state individuate abbandonando il riferimento al tenore di vita goduto nel momento in cui la famiglia era unita e perseguendo il diverso obiettivo di garantire ai nuovi nuclei familiari che si formano a seguito del divorzio un tenore di vita simile tra loro.⁴⁷ In questo particolare contesto la S.C. – in un momento in cui il criterio del tenore di vita coniugale costituiva ancora il parametro fondamentale che governava l'attribuzione dell'assegno divorzile – ha preso atto del dato per cui la presenza di una nuova famiglia costituita dall'ex coniuge tenuto al pagamento dell'assegno divorzile ex art. 5 l. div. comporta una variazione degli assetti pregressi che deve essere necessariamente considerata al fine di conseguire un temperamento dei diritti della prima famiglia necessario ad evitare un trattamento deteriore della seconda.⁴⁸ In definitiva, pertanto, in uno scenario ormai segnato dalla maturata consapevolezza riguardo alla complessità delle relazioni che si instaurano

⁴⁶ La giurisprudenza di merito ha precisato che gli obblighi «di mantenimento» assunti nell'ambito di un secondo matrimonio nei confronti di un minore con il quale si sia instaurato un significativo rapporto ascrivibile alla categoria della «genitorialità sociale» non possono costituire un elemento capace di incidere sui pregressi obblighi nei confronti dell'ex coniuge divorziato e giustificare una riduzione dell'assegno divorzile dovuto a quest'ultimo (Trib. Roma 19 maggio 2017, in *DeJure.it*).

⁴⁷ Trib. Firenze 3 ottobre 2007, in in *Fam. e dir.*, 2008, 1, pp. 52 ss., con nota di AL MUREDEN, Enrico, *Tenore di vita e assegni di mantenimento tra diritto ed econometria*.

⁴⁸ Cass. Civ. 23 agosto 2006, n. 18367, in *OneLegale.it*; Cass. Civ. 24 gennaio 2008, n. 1595, *ivi*.

nell'ambito delle famiglie che si sovrappongono nel tempo, si registra una crescente e significativa presenza di decisioni nelle quali gli obblighi scaturenti dalla solidarietà post-coniugale trovano un limite nel sorgere di nuovi obblighi derivanti dalla creazione di un nucleo familiare nel quale siano presenti un secondo coniuge o figli comuni.

Le conseguenze che la formazione di una famiglia ricomposta può riflettere sull'assegno post-matrimoniale sembrano arricchirsi di una prospettiva ulteriore dischiusa dalla profonda rilettura dell'art. 5, comma 6, l. div. operata nel 2018 dalle Sezioni Unite⁴⁹ che –superando l'orientamento dominante per quasi tre decenni in virtù del quale il coniuge economicamente debole poteva confidare su un mantenimento corrisposto e commisurato in funzione dell'obiettivo di assicurare a colui che non disponesse di adeguati redditi propri il persistente godimento del tenore di vita coniugale⁵⁰– hanno valorizzato la polifunzionalità dell'assegno divorzile attribuendo ad esso una funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Proprio questa nuova lettura, infatti, ha creato i presupposti affinché l'assegno divorzile possa costituire lo strumento attraverso il quale riconoscere alla parte maggiormente dedicata alla cura dei figli un'adeguata tutela economica.⁵¹

La valorizzazione della funzione compensativa, quindi, induce ad osservare il problema di individuare un equilibrato assetto economico nell'ambito di nuclei familiari ricomposti soprattutto laddove venga in considerazione il problema della compensazione del coniuge motivata dall'assunzione del ruolo di genitore

⁴⁹ Cass. Civ., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Corr. giur.*, 2018, 10, pp. 1186 ss., con nota di PATTI, Salvatore, «Assegno di divorzio: il 'passo indietro' delle Sezioni Unite»; in *Foro it.*, I, 2018, cc., p. 2671 ss.; con nota di BIANCA, Mirzia «Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?»; in *Giur. it.*, 8-9, 2018, p. 1843 ss., con nota di RIMINI, Carlo «Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa». Le molteplici questioni emerse sotto il profilo civilistico, processuale e penalistico a seguito della decisione delle Sezioni Unite sono analizzate nei contributi compendiativi nel numero monografico di *Fam. e dir.*, *L'assegno di divorzio dopo la decisione delle Sezioni Unite*, 2018.

⁵⁰ Cass. Civ., SS.UU., 29 novembre 1990, n. 11490, in *Foro it.*, 1991, I, cc. 67 ss., con nota di QUADRI, Enrico, «Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite» e di CARBONE, Vincenzo, «*Urteildämmerung*: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)». Sull'assegno post-matrimoniale nel panorama precedente alla decisione delle Sezioni Unite del 2018, RIMINI, Carlo, «Il nuovo divorzio», *cit.*, p. 105 ss.; BONILINI, Giovanni, *L'assegno post-matrimoniale*, in *Id.*, Ferruccio Tommaseo, *Lo scioglimento del matrimonio*, in Piero Schlesinger (già diretto da), Francesco Donato Busnelli (continuato da), III ed., Milano, 2010, p. 575 ss.; GIACOBBE, Giovanni e Pietro Virgadamo, *Il matrimonio*, in Rodolfo Sacco (diretto da), *Trattato di diritto civile*, III, 2, Torino, 2011, p. 57.

⁵¹ La rilevanza assunta dal ruolo di genitore prevalente come elemento capace di giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile è stata sottolineata in alcune pronunce nelle quali ha assunto una fondamentale rilevanza l'impegno profuso da uno dei coniugi successivamente alla rottura dell'unione sia con riferimento a figli ancora minori di età (Trib. Ravenna 14 settembre 2018, in *Giuraemilia*) sia con riguardo ai figli affetti da disabilità e quindi destinati a non conseguire mai una piena indipendenza (Trib. Bologna 7 agosto 2018, in *Giuraemilia*). La fondamentale rilevanza attribuita al contributo endofamiliare emerge anche in Trib. Pescara 29 agosto 2018, in *Cassazione.net*, che ha riconosciuto il diritto a percepire un assegno post-matrimoniale parametrato nella «misura massima del terzo del reddito mensile nella disponibilità» dell'onerato con riferimento ad una fattispecie nella quale, durante un matrimonio durato quasi trent'anni la moglie aveva rinunciato ad esercitare la professione di insegnante nella scuola dell'infanzia per favorire la progressione di carriera del marito appartenente alla Guardia di Finanza e soggetto a periodici trasferimenti. Sul problema della compensazione del coniuge per lungo tempo dedicato alla famiglia SESTA, Michele, «La rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare nella concreta quantificazione dell'assegno divorzile», in *Fam. e dir.*, 11, 2018, p. 988.

prevalente. Sotto questo profilo occorre considerare che l'impatto dei sacrifici correlati all'assunzione delle incombenze familiari può essere apprezzato come elemento che ha caratterizzato la vita coniugale e che porta con sé conseguenze irreversibili dopo il divorzio, ma anche, come una situazione che condiziona la fase –spesso temporalmente assai estesa– nella quale la prevalente dedizione all'accudimento dei figli si svolge nel contesto di una famiglia ormai destrutturata. In questo senso l'esperienza comparatistica, riferita ai sistemi di *common law*,⁵² ma anche ad ordinamenti di *civil law* come quello spagnolo,⁵³ testimoniano la crescente rilevanza della dedizione «passata e futura» alla cura della famiglia ed il fondamentale ruolo svolto dal genitore che, dopo la rottura dell'unione, assume un carico prevalente di lavoro di accudimento.

La possibilità di riconoscere un assegno divorzile compensativo al genitore che assuma un ruolo prevalente nella cura dei figli dopo la rottura del matrimonio non deve indurre a prefigurare una espansione incontrollata dei doveri scaturenti dalla solidarietà post-coniugale.

Il delinearsi di uno scenario maggiormente favorevole a riconoscere nella prolungata dedizione ai compiti di cura dei figli una meritevolezza di tutela non significa tuttavia giungere fino al punto di estendere i benefici economici scaturenti dalla solidarietà post-coniugale anche a favore di colui che, con un atto di autoresponsabilità, dia vita ad una nuova famiglia.

In questo senso una significativa e condivisibile limitazione delle posizioni di interdipendenza economica tra ex coniugi fondata sul principio dell'autoresponsabilità si rinveniva nell'orientamento sviluppatosi con riguardo alla fattispecie nella quale si riscontri l'instaurazione di una convivenza da parte dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno post-matrimoniale dopo la definitiva rottura del vincolo coniugale. L'orientamento per lungo tempo consolidato –secondo cui l'instaurazione di una stabile convivenza da parte del beneficiario dell'assegno divorzile costituiva un limite agli obblighi imposti alla parte economicamente forte e poneva detto assegno «in una fase di quiescenza»⁵⁴– infatti è apparso espressione di una concezione dei rapporti tra ex coniugi che mal si concilia con il contesto normativo attuale, in cui la convivenza *more uxorio* ha ormai conseguito piena rilevanza. Così, muovendo dall'assunto secondo cui attraverso la creazione di una nuova famiglia si compie un atto di autoresponsabilità incompatibile con il persistente godimento dei benefici economici derivanti da rapporto coniugale ormai terminato, la S.C. era giunta a concludere che il venir meno dell'assegno post-matrimoniale assume un carattere definitivo e quindi non reversibile.⁵⁵

⁵² Per una illustrazione delle soluzioni adottate nell'ordinamento inglese, AL MUREDEN, Enrico, *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Ipsoa, Milano, 2007, p. 100.

⁵³ La particolare di rilevanza della dedizione ai compiti di cura dei figli anche successivamente alla rottura del matrimonio viene posta in rilievo da GÓMEZ VALENZUELA, Manuel Ángel, in José Ramón de Verda y Beamonte (diretto da), *La compensación por desequilibrio en la separación y divorcio. Tratado práctico interdisciplinar*, tirant lo blanch, Valencia, 2022, p. 99.

⁵⁴ Cass. Civ. 11 agosto 2011, n. 17195, in *Guida dir.*, 2011, 44, pp. 63 ss., con nota di VACCARO, Giorgio, «Il coniuge divorziato perde il mantenimento se instaura una convivenza stabile con un altro»; Cass. Civ. 18 novembre 2013, n. 25845, in *D&G*, 2013; Cass. Civ. 12 marzo 2012, n. 3923, in *Giust. civ.*, 2013, 2197.

⁵⁵ Cass. Civ. 3 aprile 2015, n. 6855, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 683, con nota di AL MUREDEN, Enrico, «Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile»; da ultimo, Cass. Civ. 16 ottobre 2020, n. 22604, in *DeJure.it*

Questa lettura interpretativa, invero, è stata oggetto di un *revirement* attuato a seguito di una decisione delle Sezioni Unite nel 2021.⁵⁶ Muovendo dalla rilettura dell'art. 5, comma 6 l. div. operata dalle Sezioni Unite nel 2018 e valorizzando la funzione compensativa dell'assegno divorzile le Sezioni Unite hanno chiarito che la scelta del beneficiario di intraprendere una nuova convivenza stabile non determina l'automatica ed integrale estinzione dell'assegno divorzile, che, pur venendo meno nella sua componente assistenziale, può sopravvivere per quanto concerne la componente compensativa. Un simile approdo interpretativo appare, invero, criticabile nella misura in cui si pone in una linea diametralmente opposta rispetto alle soluzioni adottate in altri ordinamenti e delineate da recenti progetti di legge, che convergono intorno al principio secondo cui occorre ricollegare l'estinzione automatica, radicale e definitiva di ogni forma di solidarietà post-coniugale sia all'ipotesi delle nuove nozze del beneficiario sia a quella nella quale quest'ultimo intraprenda una convivenza *more uxorio*.

8. Le famiglie che si sovrappongono nel tempo tra autonomia privata ed espansione dei diritti indisponibili

L'analisi delle più rilevanti questioni che si pongono nelle complesse trame di rapporti scaturenti dal divorzio e dalla successiva creazione di nuove famiglie fa emergere una crescente esigenza di ampliare i confini dell'autonomia privata al fine di consentire alle parti di modellare profili personali ed economici dei nuclei familiari che si sovrappongono nel tempo secondo modalità conformate in funzione delle concrete esigenze che caratterizzano ciascuna singola fattispecie.

Tuttavia se, da una parte, le pattuizioni intercorse tra gli sposi possono dare vita ad assetti di rapporti idonei a soddisfare particolari esigenze e le sensibilità individuali che emergono in ogni specifico contesto familiare, può paventarsi, dall'altra, il rischio che quelle medesime volontà espresse dalle parti si traducano in una compressione dei diritti indisponibili inderogabilmente riconosciuti al coniuge economicamente debole ed ai figli non autosufficienti.

Così l'esigenza di preservare l'interesse del minore alla permanenza nella casa familiare ha condotto ad escludere la validità dell'accordo con il quale i genitori avevano previsto un'automatica modifica delle regole di assegnazione della casa familiare quale conseguenza dell'eventuale instaurazione di una nuova relazione da parte della madre.⁵⁷

Nell'ambito dei rapporti «orizzontali» gli accordi –eventualmente conclusi anche nella fase precedente il matrimonio– mediante i quali i coniugi giungano a limitare o escludere il diritto all'assegno divorzile consentirebbero di delineare una disciplina sotto alcuni profili astrattamente adeguata ai rapporti generati da famiglie che si sovrappongono nel tempo.⁵⁸ Cionondimeno, anche sulla scorta dell'osservazione

⁵⁶ Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, p. 1390, con nota di QUADRI, Enrico, «Assegno di divorzio e convivenza: le sezioni unite s'impegnano nella ricerca di una soluzione coerente»; in *Fam. e dir.*, 2022, 2, p. 125, con note di DANOVÌ, Filippo, «Assegno di divorzio: no alla caducazione automatica nel caso di nuova convivenza»; di RIMINI, Carlo, «Nuova convivenza e assegno divorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema»; di AL MUREDEN, Enrico, «Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile 'compensativo' tra diritto vigente e prospettive *de iure condendo*».

⁵⁷ Trib. Palermo 29 dicembre 2016, in *Dejure.it*

⁵⁸ Per una ampia disamina delle soluzioni adottate dai progetti di riforma succedutisi negli anni recenti, SCIA, Fausta «Le proposte in tema di accordi prematrimoniali: tra valorizzazione

comparatistica,⁵⁹ sembra ragionevole affermare che la previsione di accordi diretti a limitare o escludere l'assegno divorzile, seppur auspicabili nelle ipotesi in cui la breve durata del matrimonio o la giovane età del coniuge debole conducano a valorizzare il profilo della autoresponsabilità, debba trovare, in concreto, un limite al cospetto delle ineludibili esigenze di tutelare il coniuge reduce da un matrimonio di lunga durata.⁶⁰ Anche la configurabilità di accordi «migliorativi» mediante i quali la parte economicamente forte conceda all'altra benefici economici superiori a quelli conseguibili sulla base della disciplina legale può talvolta dare vita alla compressione di diritti indisponibili.⁶¹ Non può escludersi, infatti, che i trasferimenti immobiliari operati da un coniuge a favore dell'altro al fine di compensare i sacrifici effettuati nel corso del matrimonio e quelli effettuati a beneficio dei figli, soprattutto se maggiorenni, possano essere osservati –qualora non fondati su adeguate ed obiettive motivazioni– alla stregua di indebite elargizioni liberali nella prospettiva di eredi necessari quali il nuovo coniuge ed i figli del secondo matrimonio.⁶² In quest'ottica, dunque, sembra possibile concludere che l'autonomia nella definizione delle conseguenze economiche del divorzio possa validamente esplicarsi solo laddove essa non comprima i diritti della prima famiglia –prevedendo indebite limitazioni dei doveri inderogabili scaturiti della solidarietà postconiugale– e al tempo stesso non comporti un'ingiustificata ed irragionevole erosione delle risorse da destinare ad una seconda famiglia formata successivamente al divorzio.

In definitiva, pertanto, l'autonomia nella definizione delle complesse trame di rapporti generate dalla sovrapposizione nel tempo di nuclei familiari può

dell'autonomia negoziale dei coniugi e specialità delle regole del diritto di famiglia», in *Nuove leggi civ*, 1, 2017, p. 191. La possibilità di stipulare accordi tra i coniugi è contemplata anche dal d.d.l. n. 1151 comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2019, recante *Delega al Governo per la revisione del codice civile*, il cui art. 1, comma 1, lett. b) prevede la stipulazione «tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o costituita unione civile, di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli».

⁵⁹ Per una comparazione condotta alla luce dei *prenuptial agreements* degli ordinamenti di *common law*, nei quali il principio secondo cui *each part would ...leave marriage in terms of financial equality* (Norris v. Norris, *Family Division*, (2002) EWHC 2996 (Fam)) impedisce di considerare *enforceable* l'accordo che comprime le tutele inderogabili riconosciute alla parte economicamente debole, AL MUREDEN, Enrico, «La separazione personale dei coniugi», in Antonio Cicu, Francesco Messineo e Luigi Mengoni (già diretto da), Piero Schlesinger (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, I – *La crisi della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 424.

⁶⁰ QUADRI, Enrico, «Assegno di divorzio: alle porte la riforma legislativa», in *Giustiziacivile.com.*, 20 maggio 2019, in part. p. 11.

⁶¹ Da ultimo Cass. Civ. 30 gennaio 2017, n. 2224, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2017, pp. 955 ss., con nota di GRAZZINI, Barbara, «Accordi preventivi fra coniugi e assegno divorzile *una tantum*: spunti di riflessione alla luce delle evoluzioni normative in materia di gestione della crisi familiare», nella quale è stato disposto che «sono nulli per illiceità della causa gli accordi preventivi fra coniugi aventi ad oggetto l'assegno di divorzio, siccome in violazione del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 cod. civ., nonché dell'indisponibilità del diritto a richiedere l'assegno divorzile». Un'apertura verso gli accordi prematrimoniali e gli accordi in vista del divorzio è, invece, prospettata da larga parte della dottrina. In questo senso, OBERTO, Giacomo, «I patti prematrimoniali nel quadro del diritto europeo», in *Corr. giur.*, 6, 2020, p. 794; RIMINI, Carlo, «Funzione compensativa e disponibilità del diritto all'assegno divorzile. Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio», in *Fam. e dir.*, 11, 2018, p. 1041; FUSARO, Andrea, «La sentenza delle sezioni unite sull'assegno di divorzio favorirà i patti prematrimoniali?», in *Fam. e dir.*, 11, 2018, p. 1031.

⁶² AL MUREDEN, Enrico, *La separazione personale dei coniugi*, cit., p. 443 ss.

senz'altro costituire una via da percorrere utilmente, ma entro i limiti segnati dalla tutela dei diritti indisponibili, che nel contesto attuale comprendono, oltre a quelli della famiglia originaria, anche quelli dei componenti delle famiglie formate successivamente al divorzio.

9. Limiti legali alle pratiche di fecondazione assistita e omogenitorialità: uno sguardo all'ordinamento italiano

Negli anni più recenti il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di filiazione si è ripetutamente interessato alla omogenitorialità. In Italia, la Riforma della filiazione del 2012-2013 è rimasta silente, lasciando immutate le regole di accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita e non dettando regole di conflitto specifiche per il riconoscimento in Italia di atti relativi a figli nati a seguito di tecniche attuate all'estero e vietate nel nostro Paese. Appare invero riduttivo ricondurre tali problematiche (accesso alla procreazione assistita, trascrizione in Italia degli atti di nascita formati all'estero, riconoscimento in Italia di provvedimenti di filiazione o adozione formati all'estero, ecc.) *tout court* alla natura omosessuale della coppia di genitori, dato che i limiti posti all'accesso alla fecondazione assistita, e partitamente il divieto di maternità surrogata, determinano che anche coppie eterosessuali ricorrono all'estero a pratiche in Italia vietate.

Una scorsa alla giurisprudenza, non solo italiana, consente di rilevare l'emersione preponderante di istanze di per sé non «nuove», ma che, alla luce dell'evoluzione del contesto giuridico –e ancor prima sociale– in cui emergono, hanno condotto le Corti ad aprire breccie significative all'ingresso in Italia di provvedimenti o atti stranieri di minori nati all'estero con pratiche di procreazione (ivi compresa la maternità surrogata) in Italia vietate. L'esigenza sottesa a tali aperture, come esplicitata dai giudici, risiede essenzialmente nel tutelare l'interesse dei minori coinvolti in tali vicende; la negazione del riconoscimento dello stato di filiazione conseguito all'estero infliggerebbe, secondo le Corti, un *vulnus* alla tutela del figlio, non solo sproporzionato rispetto alla finalità disincentivante delle pratiche vietate, ma altresì incidente su un soggetto diverso da chi le abbia praticate. Sarebbe però illusorio ritenere che tale approccio interpretativo di taglio, per così dire «emergenziale», circoscriva i propri effetti al caso oggetto di giudizio. La lettura delle decisioni in materia evidenzia piuttosto come sia il «fatto» a condizionare il diritto e a plasmarlo⁶³, delineando un quadro a geometrie variabili, di cui non è agevole verificare la coerenza rispetto ai principi che governano la filiazione.

Soffermandosi sulle regole di diritto interno, l'art. 250 cod. civ., rimasto sul punto invariato a seguito della Riforma, espressamente prevede che il riconoscimento sia consentito al padre e alla madre, aderendo integralmente ad un modello di genitorialità ispirata alla *imitatio naturae*; la norma esclude dunque che l'accertamento della filiazione possa essere effettuato da due soggetti dello stesso sesso.

La legge 40/2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, dal canto suo, fissa requisiti di accesso alle tecniche che fanno riferimento alla coppia di sesso diverso. Ciò è espressamente sancito dall'art. 5, legge 40/2004 –giusta il quale «possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso»–, ma si evince altresì dal divieto originariamente

⁶³ GROSSI, Paolo, «Sulla odierna fattualità del diritto», in *Giust. Civ.*, I, 2014, p. 10 ss.

posto di p.m.a. eterologa e da quello di maternità surrogata, strumentale e necessaria per la coppia omosessuale maschile. Tale modello, peraltro, non è stato posto in discussione dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto l'unione civile tra persone dello stesso sesso, tenuto conto che le norme codicistiche sulla filiazione sono state escluse espressamente dal novero di quelle applicabili all'unione civile e, come tali, non sono suscettibili di applicazione in via analogica ai sensi dell'art. 1, 20° comma, legge 76/2016.⁶⁴

L'esclusione appare coerente con la volontà del legislatore di prevedere una regolamentazione dei rapporti affettivi omosessuali, riservando loro una tutela⁶⁵ distinta dal modello matrimoniale, a cui ciò nonostante la legge fa frequentemente richiamo, che non include i rapporti di filiazione. In ciò consiste, allo stato,⁶⁶ la più evidente distinzione tra l'unione civile e il matrimonio, ma, in ottica sistematica, anche altre scelte operate all'interno della normativa rispondono alla medesima logica, ossia il riferimento alla copertura costituzionale dell'art. 2 Cost., quale formazione sociale e non quale famiglia tutelata dall'art. 29 Cost. se fondata sul matrimonio⁶⁷ -termine che non viene mai utilizzato- e l'esclusione dell'obbligo di fedeltà tra le parti dell'unione civile, di per sé connesso all'operare delle presunzioni a fondamento dell'accertamento dello stato di filiazione nel matrimonio (cfr. art. 231 c.c.).

Merita osservare come, a differenza di quanto si dirà in relazione a diversi profili -ed invero relativi alla circolazione di atti formati all'estero- la giurisprudenza di legittimità ha confermato il precipitato normativo, allorché ha respinto le censure rivolte alle regole di accesso alla procreazione medicalmente assistita. Tanto nella sentenza n. 237/2019⁶⁸ quanto nella successiva n. 230/2020⁶⁹ il Giudice delle Leggi ha affermato la compatibilità con il sistema costituzionale e sovranazionale della esclusione dall'accesso alla p.m.a. delle coppie formate da due donne. Tale scelta legislativa non solo non si pone in contrasto con il principio di non discriminazione sulla base del sesso, dato che la condizione di patologica infertilità delle coppie eterosessuali non è paragonabile a quella, fisiologica, delle coppie dello stesso sesso, ma è altresì espressione della discrezionalità dei legislatori nazionali -riconosciuta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁷⁰- in ordine ai casi ed ai requisiti di accesso alle tecniche di fecondazione artificiale.

⁶⁴ Corte cost. 23 ottobre 2019, n. 221, cit., p. 1460, la quale ha stabilito che «L'esclusione delle coppie omosessuali dalla procreazione medicalmente assistita non è fonte di alcuna distonia legislativa e neppure di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale e vanno per tanto dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in cui, rispettivamente, limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso» e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso.

⁶⁵ La Corte Edu nella pronuncia *Schalk e Kopf v. Austria* (del 24 giugno 2010) aveva, infatti, riservato all'esercizio della discrezionalità legislativa la scelta del modello di riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive.

⁶⁶ Benché i lavori preparatori avessero predisposto la possibilità di accedere all'adozione del figlio del coniuge, proposta poi abbandonata in sede di votazione.

⁶⁷ SESTA, Michele, «Sub art. 1, 1° comma, legge n. 76/2016», in Michele Sesta (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 174 ss.

⁶⁸ Corte cost. 15 novembre 2019, n. 237, cit..

⁶⁹ Corte cost. 10 ottobre 2020, n. 230, in *Fam. e dir.*, 2021, 7, p. 677 ss., con nota di DOGLIOTTI, Massimo, «Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?».

⁷⁰ Corte Edu, sentenza 15 marzo 2012, *Gas e Dubois contro Francia*.

10. La genitorialità del figlio nato in Italia con pratiche procreative in contrasto con la l. no. 40/2004

Nel sopradescritto quadro normativo interno, il fenomeno della crescente mobilità transnazionale delle persone - oltre che quello del c.d. «turismo procreativo»- hanno condotto dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi in merito al riconoscimento in Italia di quei provvedimenti o atti di nascita -formati in sistemi legali che ammettono pratiche procreative vietate in Italia- recanti rapporti di filiazione omogenitoriali non disciplinati dall'ordinamento interno. Tali fattispecie pongono due ordini di quesiti: da un lato, circa l'ammissibilità della delibazione delle sentenze di adozione e la trascrivibilità degli atti di nascita dei figli nati all'estero da trattamenti di fecondazione eterologa tra persone dello stesso sesso o di maternità surrogata; dall'altro, riguardo la legittimazione dei genitori a riconoscere ai sensi dell'art. 250 cod. civ. i figli concepiti a seguito di pratiche procreative attuate all'estero ma nati in Italia. Quanto a quest'ultimo caso, in cui dunque si chieda la formazione *ab initio* di un atto di nascita del figlio nato da due donne, la dichiarazione della madre gestazionale non solleva perplessità alcuna, in quanto conforme alle norme italiane che individuano la madre nella partoriente. Le principali difficoltà insorgono qualora, congiuntamente alla madre gestante o singolarmente, la *partner* della puerpera desideri procedere al riconoscimento del nato, sebbene priva del rapporto biologico.⁷¹

Le istanze presentate all'ufficiale di stato civile aprono una serie di quesiti e problematiche di natura interpretativa e sistematica, nonché di coordinamento tra la normativa codicistica e la disciplina della legge 40/2004, che la recente giurisprudenza ha permesso di evidenziare. Occorre sottolineare, in via di prima approssimazione, come il tema involga preliminarmente una riflessione sulla figura emergente del genitore c.d. intenzionale che rivendichi il riconoscimento dello status genitoriale e reclaims l'esercizio della responsabilità, in virtù del consenso dato in sede di trattamento procreativo, espressione della partecipazione al progetto genitoriale. La questione si pone, evidentemente, in relazione al caso di una coppia femminile, in considerazione del divieto di surrogazione di maternità e dunque della impossibilità che nasca in Italia il figlio di una coppia *same sex* maschile. La problematica in argomento coinvolge la *partner* che abbia offerto il proprio consenso alla pratica, ma anche colei che, congiuntamente al consenso, abbia eventualmente contribuito con il proprio patrimonio genetico al concepimento. Con riguardo alla donna il diverso tenore del contributo non muta il quesito o i termini del ragionamento, poichè il criterio di attribuzione fondato sul rapporto genetico opera solamente in rapporto alla figura genitoriale paterna, considerato che la donna può essere qualificata e diventare madre nel nostro ordinamento esclusivamente attraverso il parto, essendo irrilevante l'eventuale legame genetico.⁷² Cosicché, l'apporto genetico alla pratica procreativa non potrebbe venire in rilievo tenuto conto del fatto che tale scopo sarebbe perseguibile

⁷¹ Per un approfondimento sul tema della genitorialità intenzionale si v. DEL PRATO, Enrico, «La scelta come strumento tecnico di filiazione», in *Famiglia*, 4, 2001, p. 1035. In giurisprudenza, Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2018, p. 540 ss., con nota di GORGONI, Antonio, «Art. 263 cod. civ.: tra verità e conservazione dello *status filiationis*», e di SALANITRO, Ugo, «Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati»; in *Corr. giur.*, 4, 2018, p. 499 ss., con nota di FERRANDO, Gilda, «Gestazione per altri, impugnativa del riconoscimento e interesse del minore».

⁷² Cass. 15 giugno 2017, n. 14878, in *Foro it.*, 2017, I, 7-8, cc. 2280 ss. e in *Nuova Giur. Civ.*, 2017, 12, p. 1718, ove *mutatis mutandis* si afferma l'irrelevanza della assenza di vincolo genetico per essere madre.

esclusivamente mediante una domanda di accertamento della maternità, che tuttavia –e coerentemente con la previsione secondo la quale non è possibile sorga alcun legame giuridico tra il donatore di gameti e il nato– è volta esclusivamente a dimostrare la corrispondenza tra colei che risulta essere madre nell'atto di nascita e la partoriente. Anche la prova genetica, dunque, è strumentale a provare tale corrispondenza, non potendo essere diversamente diretta a far emergere diversi legami genetici (v. *sub* art. 269 cod. civ.).

La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'escludere che possa in Italia formarsi un atto di nascita contenente l'indicazione di due madri.⁷³ Ad argomento, è posto il rilievo secondo il quale l'ufficiale di stato civile è vincolato alla legge nella tenuta dei registri, cosicché non può darsi corso alla redazione di un atto di nascita che menzioni due madri, in quanto tanto le leggi in materia di p.m.a. (art. 5) quanto le norme dello stato civile (implicitamente, ma chiaramente) postulano che una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita.

A fronte della negazione del riconoscimento del legame di filiazione pieno (mediante il riconoscimento) da parte della *partner* della partoriente, si suole affermare come il rapporto di filiazione «di fatto» possa (e debba) essere formalizzato mediante il ricorso alla adozione mite *ex* art. 44 lett. d) l. ad. «In questa chiave» si legge «si esclude che una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell'interesse del minore possa fondarsi esclusivamente sull'orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo *partner*, non incidendo l'orientamento sessuale della coppia sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale».⁷⁴

È interessante osservare come la medesima soluzione sia indicata dalla giurisprudenza di legittimità tanto in riferimento al caso in cui la compagna della *partner* sia madre «intenzionale», essendosi limitata a prestare all'estero il consenso alla procreazione (eterologa) della madre, sia nella ipotesi in cui ella abbia anche donato l'ovulo e sia dunque legata al figlio da un rapporto genetico.⁷⁵ La soluzione negli argomenti pare invero distonica con la giurisprudenza –su cui oltre si dirà– in materia di riconoscimento di atto di nascita formato all'estero di figlio di coppia maschile necessariamente nato con maternità surrogata: in quel caso la Corte ha infatti rimarcato come il legame genetico costituisca elemento dirimente in relazione alla scelta dell'ordinamento di dare pieno riconoscimento al rapporto padre-figlio. Legame che rispetto alla *partner* della partoriente che sia anche madre genetica viene del tutto obliterato. Emerge allora dalla ondivaga valorizzazione del legame genetico –cui è attribuita rilevanza se necessario per attribuire al figlio lo stato di filiazione piena nei confronti di almeno un genitore, ma ritenuto irrilevante laddove già un genitore vi sia– come la giurisprudenza richiamata abbia inteso uniformarsi al principio per il quale nel nostro ordinamento il concetto di genitorialità non è, allo stato, *gender neutral*.⁷⁶

⁷³ Corte cost. 15 novembre 2019, n. 237, cit.; Cass. 4 aprile 2022, n. 10844, in *DeJure.it*; Cass. 3 aprile 2020, n. 7668, in *Fam. e dir.*, 2020, 6, pp. 573 e ss., con note di SCALERA, Antonio, «Doppia maternità nell'atto di nascita: la Cassazione fa un passo indietro», e di CALVIGIONI, Renzo, «L'ufficiale di stato civile non può registrare la nascita da genitori same sex: dai giudici di merito fino alla Cassazione», e Cass. 22 aprile 2020, n. 8029, in *Dir. & Giust.*, 2020, 23 aprile.

⁷⁴ Corte cost. 23 ottobre 2019, n. 221, cit. e Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, cit., pp. 1135 ss.

⁷⁵ *Idem* in Cass. 25 febbraio 2022, n. 6383, in *Fam. e dir.*, 2022, 6, pp. 581 ss., riguardante però una *partner* anche madre genetica.

⁷⁶ SESTA, Michele, *op. loc. ult. cit.*

11. L'ingresso in Italia di atti di nascita o sentenze straniere di riconoscimento di genitorialità in capo a coppie omosessuali

Un diverso versante di indagine concerne la circolazione dei provvedimenti e degli atti giuridici formati all'estero; al riguardo il diniego di riconoscibilità del rapporto di genitorialità omosessuale deve essere vagliato alla luce non solo delle richiamate norme dettate dall'ordinamento dello stato civile, le quali non consentono di indicare altra figura genitoriale, oltre alla madre, che non sia il padre, ma anche di quelle di diritto internazionale privato: il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, esercitando la delega del 28° comma, lett. b), legge 76/2016, invero, non ha espressamente previsto alcuna modifica in merito e nemmeno per quanto concerne la legge 218/1995, cosicché parrebbe in via di prima approssimazione inibito alla Pubblica Amministrazione di provvedere alla richiesta di riconoscimento di atti di nascita o di provvedimenti formati all'estero e vieterebbe altresì qualsiasi comportamento discrezionale dell'ufficiale di stato civile.

La posizione della giurisprudenza di legittimità sul punto è però differenziata a seconda che la procreazione assistita praticata all'estero abbia o meno richiesto il ricorso alla surrogazione di maternità.⁷⁷ Nel caso infatti in cui quest'ultima pratica non sia stata eseguita, allorché, dunque, nel processo procreativo siano coinvolte due donne, la giurisprudenza di legittimità⁷⁸ si è pronunciata affermando l'ammissibilità della trascrizione nei registri di stato civile dell'atto di nascita recante la genitorialità delle due madri; non trova infatti ostacolo per contrarietà all'ordine pubblico il rapporto di filiazione, legittimamente formatosi in conformità ad un ordinamento straniero, in ragione del perseguimento del superiore interesse del minore a mantenere inalterato il proprio *status filiationis* e, inoltre, ad essere educato e cresciuto dai genitori che l'hanno voluto quale frutto di un condiviso progetto genitoriale, essendo irrilevante l'orientamento sessuale degli stessi.⁷⁹

⁷⁷ Medesima opinione è espressa da DOGLIOTTI, Massimo, «Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri», in *Fam. e dir.*, 6, 2019, p. 667. Sulla maternità surrogata, GIUNCHEDI, Diletta, «Maternità surrogata tra ordine pubblico, *favor veritatis* e dignità della maternità», in *Corr. giur.*, 10, 2019, p. 1198; FERRANDO, Gilda, «Maternità per sostituzione all'estero: le sezioni unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento», in *Fam. e dir.*, 6, 2019, p. 653; SALANITRO, Ugo, «Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità», in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2019, p. 757; DOGLIOTTI, Massimo, «I 'due padri' e l'ordine pubblico... tra sezioni semplici e sezioni unite», in *Fam. e dir.*, 10, 2018, p. 837.

⁷⁸ Cass. 30 settembre 2016, n. 19599, in *Guida al dir.*, 2016, 44, p. 39; Cass. 15 giugno 2017, n. 14878, cit.

⁷⁹ La Corte ha infatti affermato, in epoca antecedente all'intervento del legislatore italiano in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, che l'orientamento sessuale non può essere causa di discriminazione così, come non può essere di per sé valutato quale elemento ostativo al riconoscimento di un rapporto di filiazione (Cass. 19599/2016, cit.). Sulla scia dell'orientamento inaugurato dalla Cassazione, una parte della giurisprudenza ha promosso in rapida successione una serie di provvedimenti favorevoli all'ingresso in Italia di sentenze o atti stranieri attributivi della genitorialità in capo a genitori omosessuali: i giudici hanno ordinato, infatti, la trascrizione degli atti di nascita recanti la maternità della madre biologica e della *partner*, genitore «intenzionale», che aveva formato il proprio consenso al trattamento fecondativo secondo la legge straniera, con l'intento di realizzare il medesimo progetto genitoriale [App. Perugia 7 agosto 2018; Trib. Pisa 23 luglio 2018; App. Venezia 28 giugno 2018; Trib. Roma 11 maggio 2018; Trib. Livorno 12 dicembre 2017; App. Trento 23 febbraio 2017 (www.articolo29.it)]; successivamente hanno permesso la delibazione delle sentenze di adozione che recavano la genitorialità in capo a due padri [Trib. min. Milano 10 ottobre 2018 (www.articolo29.it)]; oltre che la rettifica degli atti di nascita in conformità alle richieste dei padri che avevano ottenuto il riconoscimento della co-genitorialità in un ordinamento straniero [Trib.

Passaggio cruciale della argomentazione della Cassazione è il riferimento alla nozione di ordine pubblico inteso come ordine pubblico internazionale. Si legge: «una simile incompatibilità potrebbe sussistere soltanto qualora la norma straniera (costituente fonte normativa dell'atto di cui si tratta) fosse contrastante con principi fondamentali della nostra Costituzione, da enuclearsi in armonia con quelli desumibili dalle principali fonti internazionali, poiché solo in tal caso potrebbe opporsi un principio di ordine pubblico, a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16 e 65, e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, idoneo ad impedire all'atto straniero di produrre effetti in Italia». Ne discende, per quanto in questa sede maggiormente rileva, in primis, che per la Cassazione non contrasta con l'ordine pubblico l'atto di nascita straniero che indichi due madri, in quanto la regola secondo cui è madre colei che ha partorito, a norma dell'art. 269, comma 3, c.c. non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, almeno in riferimento alla fattispecie in cui vi sia una madre gestazionale e l'altra genetica.

Su un piano più generale, poi, non può considerarsi in contrasto con l'ordine pubblico la genitorialità di coppia omosessuale, in quanto diventare genitori e formare una famiglia costituisce «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi» delle persone, ricondotta dalla Corte Costituzionale⁸⁰ agli artt. 2, 3 e 31 Cost. (e, si noti, non all'art. 29 Cost.), e «deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli». Infatti, «il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra i coniugi e figli [...] identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri»:⁸¹ di conseguenza l'elemento di discriminazione rappresentato dalla diversità di sesso tra i genitori –che è tipico dell'istituto matrimoniale– «non può giustificare una condizione deteriore per i figli né incidere negativamente sul loro status».

12. Segue. Il problema (invero comune alle coppie eterosessuali) della procreazione mediante maternità surrogata

Una separata considerazione deve essere svolta in riferimento alla controversa fattispecie nella quale la procreazione assistita praticata all'estero abbia comportato il ricorso alla maternità surrogata. Un'ordinanza interlocutoria della prima sezione della Cassazione⁸² ha rimesso all'attenzione delle Sezioni Unite la questione relativa al riconoscimento degli effetti, in Italia, di una sentenza straniera che attribuiva la paternità al coniuge del padre biologico del figlio nato a seguito di gestazione per altri.⁸³ La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia 12193/2019,⁸⁴

Milano 24 ottobre 2018, n. 2934; Trib. Milano 24 ottobre 2018, n. 2935 (www.articolo29.it). Un Tribunale [Trib. Livorno 14 novembre 2017 (www.articolo29.it)] si è spinto ad ordinare la rettifica dell'atto di nascita recante la sola genitorialità del padre biologico, provvedendo a riconoscere la paternità del *partner*, nonostante non vi fosse alcun provvedimento straniero.

⁸⁰ Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162, in *Fam. e dir.*, 2014, 8-9, p. 753 e Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in *Fam. e dir.*, 2010, 7, p. 653.

⁸¹ V. Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166, in *Fam. e dir.*, 1998, 3, p. 205.

⁸² Cass. 22 febbraio 2018, n. 4382, in *Fam. e dir.*, 2018, 10, p. 837.

⁸³ App. Trento 23 febbraio 2017, in *Corr. giur.*, 2017, 7, p. 935; la vicenda appare identica a quella decisa qualche mese prima in seguito all'ordinanza depositata il 16 luglio 2018 con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha riconosciuto gli effetti, in Italia, di una sentenza canadese che attribuiva la seconda paternità al coniuge del padre di un minore nato grazie ad una gestazione per altri.

⁸⁴ Cass., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, cit..

riferendosi alla nozione di ordine pubblico di cui alla sentenza 16601/2017⁸⁵ e già fatto proprio dalla richiamata sentenza Cass. n. 19599/2016, ne ha affermato⁸⁶ la contrarietà in relazione a quei provvedimenti o atti stranieri che attribuiscono la genitorialità al genitore intenzionale del nato da maternità surrogata.

Il divieto di gestazione per altri, infatti, nella prospettiva della Corte, costituisce principio di ordine pubblico – anche in considerazione della rilevanza penale della stessa – in quanto posto a presidio della dignità umana della gestante e in conflitto con la scelta legislativa di consentire la realizzazione di un progetto di genitorialità privo del legame biologico solo attraverso l'adozione, istituto regolato nell'interesse prevalente del minore e non dal mero accordo fra le parti. L'applicazione di tale pratica effettuata all'estero e vietata in Italia costituisce elemento discriminante per l'ingresso di atti formati all'estero attributivi della genitorialità priva di legami genetici col nato. Cosicché, mentre nel caso (come quello oggetto della sentenza 19599/2016) in cui la gravidanza sia condotta da parte della madre con materiale genetico della *partner*, ma non sussista la prefigurata scissione tra gravidanza e maternità, l'atto di nascita formato all'estero che indichi due madri può essere riconosciuto in Italia, allorché invece la nascita del bambino avvenga mediante la pratica della gestazione per altri la contrarietà all'ordine pubblico ne ostacola l'ingresso. Ne discende che il genitore intenzionale –privo di legame genetico col nato e in relazione al quale la trascrizione dell'atto straniero che lo qualifica come genitore non è ammissibile– possa domandare l'adozione «mite» del minore ai sensi dell'art. 44, lett. d), legge ad., come rinforzata dalla Corte Costituzionale,⁸⁷ instaurando così nei suoi riguardi un vincolo giuridico formale ma non «pieno».

13. Il tramonto del ricorso all'adozione mite (e del divieto di maternità surrogata) o un suo nuovo corso?

La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite non ha sedato il dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, in ordine alla circolazione degli atti di nascita delle coppie *same sex* maschili di bambini nati all'estero da maternità surrogata. La stessa Cassazione⁸⁸ ha infatti investito la Corte Costituzionale della q.l.c. nelle norme italiane, così come interpretate nel diritto vivente, con i principi costituzionali e sovranazionali di eguaglianza, di tutela della vita familiare e di tutela dell'interesse del minore. A giustificare la rimessione della questione innanzi al Giudice delle Leggi è, nella prospettiva della Corte, la pubblicazione del parere consultivo della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla richiesta preventi-

⁸⁵ Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Danno e resp.*, 2017, 4, p. 335; in *Foro it.*, 2017, I, 9, c. 2630. In argomento si v. SESTA, Michele, «Risarcimenti punitivi e legalità costituzionale», in *Riv. dir. civ.*, 1, 2018, p. 305.

⁸⁶ Viene sottolineato in un passaggio della pronuncia come: «In tal senso depongono anche la legge 218/1995, art. 64 e segg., i quali, nel disciplinare l'ingresso nel nostro ordinamento di atti e provvedimenti formati all'estero, non prevedono affatto il recepimento degl'istituti ivi applicati, così come sono disciplinati dagli ordinamenti di provenienza, ma si limitano a consentire la produzione dei relativi effetti, nella misura in cui gli stessi risultino compatibili con la delineata nozione di ordine pubblico».

⁸⁷ V. Corte cost. 28 marzo 2022, n. 79, in *Foro It.*, 2019, 3, 1, c. 729, con la quale la Corte ha dichiarato illegittimo –con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della CEDU– l'articolo 55 della legge n. 184 del 1983, là dove imponeva di applicare all'adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall'articolo 300, secondo comma, del Codice civile per l'adozione dei maggiorenni.

⁸⁸ Cass. 29 aprile 2020, n. 8325, in *Famiglia*, 21 settembre 2020.

va della Adunanza Plenaria della Corte di Cassazione francese (decisa con *arrêt interlocutoire* n. 638 del 5 ottobre 2018 e trasmessa con lettera del 12 ottobre 2018), in data 4 aprile 2019, reso in relazione alla procedura di riesame del giudicato emesso dalla Corte di Cassazione francese dopo la decisione dei casi *Menesson e Labassee c. Francia* da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.⁸⁹ Nell'ambito di quel procedimento, il parere consultivo reso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che la formalizzazione del legame genitoriale tra il genitore intenzionale e il figlio mediante l'adozione è «accettabile» «a condizione che le modalità previste dal diritto interno per l'adozione garantiscano la effettività e celerità del riconoscimento e che esso risulti conforme all'interesse superiore del minore». Non sussisterebbero, ad avviso della S.C., gli indicati parametri allorché la genitorialità intenzionale dipenda dalla pronuncia di adozione speciale *ex art. 44 lett. d)*, in quanto non solo «eventuale», ma anche perché costitutiva di un legame attenuato⁹⁰. Nella prospettiva del giudice remittente, la tutela del nato e il suo preminente interesse –anche a conservare il proprio *status* legalmente acquisito e la propria identità personale–, non può trovare ragione di compressione in virtù né dell'operare dell'ordine pubblico internazionale, né dell'aprioristica applicazione del principio di tutela della dignità della gestante «surrogata», almeno allorché il sistema normativo dello Stato estero in cui la gestazione per altri è stata praticata la preservi da finalità di tipo commerciale.

La Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza 33/2021, accogliendo le istanze poste alla base della sentenza di rimessione ed affermando, in definitiva, l'inidoneità dell'adozione «mite» a tutelare adeguatamente il minore e l'esigenza, dunque, di modificare il «diritto vivente». Se è vero, infatti, che ai singoli ordinamenti è riconosciuta dalla giurisprudenza sovranazionale ampia discrezionalità in relazione alla ammissibilità della pratica della maternità surrogata ed alla scelta dei mezzi con cui pervenire al riconoscimento del legame con il genitore o i genitori committenti, –ivi compresa l'adozione– «è però imprescindibile –avverte la Consulta– che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all'interesse superiore del bambino» (*ibidem*, paragrafo 51). Nondimeno, l'adozione «mite» –nella sua originaria fisionomia– non è idonea a creare il legame giuridico di parentela tra il figlio e i parenti del genitore, in considerazione del richiamo fatto dall'art. 55 l. ad. all'art. 300 c.c. dettato in materia di adozione del maggiorenne, giusta il quale «L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge» (comma 2).

Merita, quindi, di essere infine menzionato l'ulteriore passo compiuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 32/2021, in materia di adozione «mite» da parte della compagna della madre di figlio nato in Italia. Quanto viene specialmente in rilievo, in tale fattispecie, è l'inidoneità dell'adozione «mite» a garantire la formalizzazione del legame tra il figlio e la madre d'intenzione, tenuto conto che l'applicazione dell'istituto è condizionato al consenso del genitore. Nel dichiarare inammissibili le q.l.c. degli artt. 8 e 9 della l. 40/2004 e dell'art. 250 c.c. la Corte

⁸⁹ Corte Edu 26 giugno 2014, ric. nn. 65192/11 e 65941/11.

⁹⁰ «Tenuto anche conto del sopravvenuto parere espresso dalla Grande Camera della Corte EDU – afferma la Corte– il Collegio ritiene che la formulazione delle disposizioni normative applicate nella fattispecie offra una resistenza insuperabile ad essere interpretata in modo conforme alla Convenzione e alla Costituzione, se interpretate secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite e del diritto vivente così formatosi».

ha, quindi, affermato che i nati a seguito di p.m.a. eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, infatti, se nati in Italia, possono veder riconosciuto il legame genitoriale con la madre partoriente, ma non con la sua *partner*, rimanendo privati del legame genitoriale con la madre d'intenzione, specie allorché, intervenuta la crisi di coppia, la donna non dia il proprio consenso alla dichiarazione dell'adozione mite ai sensi dell'art. 46 l. ad. La sentenza si chiude con un forte monito al legislatore, «al fine di individuare, come già auspicato in passato, un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana».

Per tali ragioni l'adozione «mite», ritiene il Giudice delle Leggi, costituisce una «forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati».

Ne discende la segnalazione di un vuoto normativo che, se non colmato, come auspicato, dal legislatore mediante un istituto *ad hoc*, impone un nuovo (invocato) intervento delle Sezioni Unite, di cui la Corte costituzionale nondimeno traccia le coordinate; se, infatti, l'intervento interpretativo si rivolge alla determinazione della compatibilità della delibazione o trascrizione dell'atto di nascita da g.p.a. con i valori sottesi al divieto di surrogazione, sempre tenuto conto del non comprimibile interesse del minore, il giudizio non potrà che farsi in concreto tenendo conto di tutte le circostanze del caso (gratuità della surrogazione, tutela della dignità della donna, luogo di svolgimento della pratica, esistenza di vincolo biologico tra il nato e un membro della coppia).

Alla luce di tale intervento la S.C., con ordinanza interlocutoria n. 1842/2022 ha rimesso gli atti al primo Presidente affinché valuti l'assegnazione del ricorso alle S.U. per l'accertamento della inidoneità del ricorso all'adozione in casi particolari per riconoscere il legame giuridico del bambino nato con maternità surrogata con il genitore d'intenzione. Il quesito ha, di per sé, effetti di potenziale scardinamento del sistema, sollecitando di fatto una rimeditazione della lapidaria (e indifferenziata) chiusura fino ad ora operata in riferimento alla pratica di maternità surrogata. E se è vero che tale impulso si iscrive all'interno dell'apparentemente confortante quadro della ricerca del più adeguato strumento di «tutela dell'interesse del minore», non può escludersi a priori che il contenuto della clausola si presti in futuro a ondivaghe interpretazioni, se non a vere e proprie strumentalizzazioni.

Le argomentazioni poste alla base della rimessione alle S.U. debbono da ultimo essere parzialmente rivisitate alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 79/2022, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità del richiamato art. 55 l. ad. nella parte in cui rinvia all'art. 300 c.c. ed inibisce così il vincolo parentale tra il figlio adottato ai sensi dell'art. 44 e i parenti del genitore. Non è questa la sede per soffermarsi sull'articolato tessuto argomentativo della sentenza e della sua dirompenza sistematica;⁹¹ quanto preme nondimeno evidenziare è come la modifica degli effetti dell'adozione mite ad opera del Giudice delle Leggi fa venir meno uno degli aspetti di «debolezza» della soluzione dell'adozione «mite» per rispondere all'esigenza di riconoscimento della genitorialità «intenzionale», *id*

⁹¹ Sul punto si rinvia a NOVELLO, Federica, «Adozione 'mite' e legame parentale: l'intervento della Corte costituzionale», in *Giustiziacivile.com.*, 23 giugno 2022.

est il mancato ingresso del figlio nella rete parentale dell'adottante. Ciò comporta una significativa riduzione della valenza delle critiche avanzate dalla medesima Corte con le sentenze 32 e 33 del 2021, allo stato affidata *in toto* all'ulteriore argomento della non automaticità dell'adozione «mite» e della necessità che essa venga richiesta dal genitore interessato e che ad essa acconsenta l'altro.

14. Il riconoscimento in Italia di adozione straniera da parte di coppia omosessuale

Un ulteriore, ed ultimo, versante di indagine è quello del riconoscimento di provvedimenti di adozione di genitori *same sex* perfezionatasi all'estero, dei quali si chiede il riconoscimento in Italia. Ora, sul punto le norme di diritto internazionale privato di cui alla l. 218/1995 si intersecano con quelle dettate dalla l. 184/1983 relativamente alla adozione di minori stranieri da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia mediante il procedimento di adozione c.d. internazionale; di minori stranieri da parte di genitori italiani residenti all'estero *ex art.* 36 comma 4 l. ad.; di minori stranieri da parte di genitori stranieri all'estero. Nella specie viene in rilievo l'art. 41 l. 218/1995, ai sensi del quale «i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66» (comma 1) e «Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori» (comma 2). Tale secondo comma, dunque, compie un richiamo implicito agli artt. 35 e 36 l. ad. ed alle ivi contemplate penetranti verifiche di merito da parte del Tribunale per i Minorenni.

La relazione tra il primo e il secondo comma della norma è stata oggetto di definizione da parte della Corte Costituzionale con sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 2016, n. 76,⁹² la quale ha chiarito –relativamente alla materia che ci occupa– come il riconoscimento «automatico» ai sensi degli artt. 64 ss. sia riservato ai provvedimenti di adozione propriamente stranieri, e dunque relativi a minori stranieri, da parte di cittadini stranieri (essendo irrilevante l'eventuale seconda cittadinanza italiana di uno di essi) e resi all'estero.

Laddove ci si trovi innanzi ad una adozione che coinvolge invece genitori adottivi che, a prescindere dalla cittadinanza, risiedono in Italia e il minore adottato proviene dall'estero, dovendoli raggiungere nel territorio nazionale, si applica la disciplina dell'adozione internazionale, contenuta negli artt. 29 e ss. l. ad. In tal caso, anche qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni previste per l'adozione internazionale previste dall'articolo 4 della Convenzione dell'Aja. Ai sensi dell'art. 35 l. ad., il Tribunale è tenuto ad accertare che l'adozione pronunciata all'estero prima dell'arrivo del minore in Italia non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, al sussistere delle condizioni previste dall'art. 4 della Convenzione.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i Minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.

⁹² In *Giur. Cost.*, 2016, 2, p. 691 ss.

Di norma, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui non siano rispettati requisiti sostanziali e procedurali, concernenti, tra gli altri, i requisiti previsti per gli adottanti dalla legge italiana sull'adozione, il coinvolgimento delle autorità centrali e di un ente autorizzato e la corrispondenza dell'affidamento all'interesse del minore.⁹³

In questo contesto va menzionato altresì l'art. 36, comma 4, L. n. 184/1983, il quale dispone che «[l']adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione». Si tratta di una norma evidentemente volta ad evitare che mediante temporanei cambi di residenza, strumentali a giovare della legge straniera più conveniente, i cittadini italiani possano eludere le disposizioni in materia di adozione internazionale.

Le norme sommariamente richiamate, restituiscono –per quanto in questa sede maggiormente rileva– come l'istituto dell'adozione non consenta a cittadini italiani dello stesso sesso di conseguire all'estero un titolo di filiazione adottivo e vederne riconosciuti in Italia gli effetti, tenuto conto che le norme sull'adozione internazionale da un lato e la norma, per così dire antielusiva, contenuta nell'art. 36 comma 4 c.c. dall'altro, impediscono di dare ingresso ad adozioni pronunciate in deroga ai requisiti di accesso degli adottanti⁹⁴ indicati dalla legge (interna).

Diverse considerazioni possono svolgersi con riguardo al riconoscimento di provvedimenti di adozione straniera, riguardante cioè adottanti e adottato stranieri e pronunciata all'estero:⁹⁵ essi sono riconosciuti in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (art. 64), purché sussistano i requisiti ivi indicati e dunque: 1) che la decisione estera sia stata assunta da un giudice competente alla stregua di principi omogenei a quelli dell'ordinamento interno (lett. a), c.d. competenza internazionale); 2) che il procedimento straniero si sia regolarmente instaurato (lett. b e c); 3) che la decisione sia passata in giudicato secondo le regole di quell'ordinamento (lett. d) e non contrasti con un giudicato interno (lett. e); 3) che non penda un procedimento interno anteriore tra le stesse parti e con lo stesso

⁹³ Si prevede in particolare all'art. 35 u.c. che «Fatto salvo quanto previsto nell'art. 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse». Ai sensi del successivo art. 36 poi «L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h)».

⁹⁴ Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, 3, p. 775.

⁹⁵ Al riguardo si rimanda a SESTA, Michele, «Adozione consensuale estera e ordine pubblico: una decisione che non persuade», in *Fam. e dir.*, 11, 2021, p. 1011 ss.

oggetto (lett. f); 4) che gli effetti della sentenza da riconoscere non violino l'ordine pubblico (c.d. internazionale, lett. g).

Ora, anche in tale frangente di indagine la giurisprudenza delle Corti superiori è allo stato allineata nell'escludere che l'identità di sesso degli adottanti possa costituire un ostacolo al riconoscimento in Italia di sentenze «straniere di adozione», non rientrando la diversità di sesso ed il vincolo di coniugio nel contenuto dell'ordine pubblico internazionale. Dapprima con sentenza n. 14007/2018 -relativa al riconoscimento in Italia di due sentenze di adozione pronunciate in Francia nei riguardi di due bambine, nate da procreazione assistita eterologa, da madri omosessuali sposate all'estero, di cui l'una adottava la figlia dell'altra- la Cassazione ha affermato che nell'ambito dell'adozione la valutazione della contrarietà all'ordine pubblico deve essere comunque sempre valutata alla luce del principio del superiore interesse del minore; tale principio opera infatti come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico, che va sempre declinata con cautela ed alla luce del singolo caso concreto. Ne discende, nel ragionamento della Corte, come tale interesse si concreti nel «diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali», senza che al riguardo possa venire in alcun conto la natura omosessuale degli adottanti.⁹⁶ Il caso di specie, invero, riguardando l'adozione del figlio della compagna, non richiedeva la valutazione circa la rilevanza del diritto del bambino a crescere all'interno della propria famiglia di origine, trattandosi dell'adozione del figlio della (sola) *partner*. Aspetto invece cruciale, di norma, in materia di adozione. D'altronde uno sguardo seppure fugace alla più recente giurisprudenza in materia di adozione mette in risalto come l'effetto della adozione piena di recidere i legami giuridici con la famiglia biologica costituisca (almeno di principio) una eccezione. Solo l'effettivo abbandono del minore consente l'assunzione di provvedimenti altrimenti non giustificati, in una prospettiva rimediabile che, tenuto conto della normativa e della giurisprudenza interne e sovranazionali, non può negarsi costituisca principio di ordine pubblico (internazionale).

Tale profilo è rimasto nondimeno in ombra -ma in maniera meno giustificabile, tenuto conto della fattispecie da cui la sentenza originava- nella successiva sentenza delle S.U. n. 9006/2021,⁹⁷ riguardante il riconoscimento di un provvedimento di adozione statunitense da parte di due uomini, uno cittadino americano, l'altro cittadino americano e italiano, di un bambino di nazionalità americana. L'adozione era stata pronunciata con il consenso preventivo dei genitori biologici e dopo un'indagine effettuata sugli adottanti da una agenzia pubblica equiparabile ai servizi sociali.

Poggiando sul richiamo al principio di ordine pubblico internazionale come limite al riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione, le S.U. non solo hanno ribadito l'ormai tralasciato principio di influenza dell'orientamento sessuale nelle controversie riguardanti la responsabilità genitoriale sui minori, ma hanno altresì individuato un catalogo di diritti «preordinati» rispetto al parametro della

⁹⁶ Cass. 11 gennaio 2013, n. 601, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 5, p. 432; Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 12, p. 857 con nota di FANTETTI. In ordine alla non incidenza dell'orientamento sessuale della coppia sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale v. Cass. 20 giugno 2017, n. 15202, in *Leggi d'Italia*; Cass. 12962/2016, cit.

⁹⁷ Cass., S.U., 31 marzo 2021, n. 9006, in *Fam. e dir.*, 2021, 11, p. 992.

diversità di sesso degli adottanti, e tra questi l'autodeterminazione del minore e degli aspiranti genitori, la conservazione dello *status* acquisito all'estero e il principio di non discriminazione.

Non vi è dunque ostacolo al riconoscimento di sentenza straniera di adozione di coppia omosessuale (straniera), di guisa che in Italia tale provvedimento può produrre l'effetto di far conseguire uno stato di filiazione pieno in capo al figlio nei riguardi di entrambi i membri della coppia adottiva. In tal senso, l'adozione costituisce il modello genitoriale che consente il più forte riconoscimento giuridico della genitorialità omosessuale; il che, a ben vedere, su un piano generale appare non solo giustificata dalla matrice solidaristica e rimediale dell'istituto, ma anche coerente con il fatto che l'adozione si prefigura sempre, e dunque anche per la coppia eterosessuale, come ipotesi di filiazione che prescinde dal legame biologico con entrambi gli adottati. Se a ciò si aggiunge la previsione nel nostro sistema interno di una norma antielusiva della legge nazionale (art. 36 comma 4, l. ad.) – idonea ad escludere, almeno in astratto, fenomeni di «turismo adottivo» –, la pronuncia delle S.U. risulta, tra gli arresti giurisprudenziali precedentemente citati, quello, in definitiva, meno «stressante» per il sistema.

Quanto rimasto criticabilmente in ombra nella pronuncia, però, è il profilo della rilevanza dell'effettivo stato di abbandono come presupposto della sentenza di adozione; ciò che la Corte ha affermato è la non contrarietà dell'adozione consensuale all'ordine pubblico internazionale, senza tuttavia in alcun modo rimarcare l'esigenza che sia data prova della condizione di abbandono posta a base della pronuncia. Per tale ragione, e magistralmente,⁹⁸ la sentenza delle S.U. è stata oggetto di critica, per aver omesso una verifica che appare a tutti gli effetti cruciale.

Il che lascia ipotizzare che, al di là dell'autorevolezza dell'organo emanante, vi sia spazio per ulteriori riflessioni in ordine alla diversa declinazione dell'endiadi ordine pubblico internazionale-interesse del minore, ove maggiore rilevanza sia attribuita a ciò che distingue la filiazione adottiva rispetto alla filiazione per procreazione assistita: *id est* il carattere rimediale e di *extrema ratio* dell'istituto, inesorabilmente ancorato alla permanente idoneità della famiglia di origine ad adempiere alla propria funzione.

Referencias bibliográficas

Al Mureden, Enrico, *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Ipsoa, Milano, 2007.

Al Mureden, Enrico, «La separazione personale dei coniugi», in Antonio Cicu, Francesco Messineo e Luigi Mengoni (già diretto da), Piero Schlesinger (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale, I – La crisi della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2015.

AL MUREDEN, Enrico, «Commento sub art. 316 c.c.», in Michele Sesta (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Giuffrè, Milano, 2017.

ARCERI, Alessandra, «Sub art. 337-sexies c.c.», in Michele Sesta (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Giuffrè, Milano, 2016.

BARCELLONA, Pietro, «Famiglia (diritto civile)», in *Enc. dir.*, XVI, Giuffrè, Milano, 1967.

⁹⁸ SESTA, Michele, «Adozione consensuale estera...», *cit.*, spec. p. 1015.

BERNAND, Younes, «Le temporalité dans le droit de la famille français», in *Cahiers droit*, 2018, 4.

BESSONE, Mario, «Commento sub art. 29 Cost.», in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1976.

BIANCA, Mirzia, «L'unicità dello stato di figlio», in Cesare Massimo Bianca (a cura di), *La riforma della filiazione*, WKI-CEDAM, Milano-Padova, 2015.

BIANCA, Cesare Massimo, «La riforma della filiazione», ne *Le nuove Leggi civili commentate*, 2, 2013.

BIANCA, Cesare Massimo, «La legge italiana conosce solo i figli», in *Riv. dir. civ.*, 1, 2013.

BILÒ, Giovanna, «I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell'ordinamento inglese», in *Familia*, 4, 2004.

Bonilini, Giovanni, *L'assegno post-matrimoniale*, in Ferruccio Tommaseo, *Lo scioglimento del matrimonio*, in Piero Schlesinger (già diretto da), Francesco Donato Busnelli (continuato da), III ed., Milano, 2010.

BUZZELLI, Dario, *La famiglia «composita». Un'indagine sistematica sulla famiglia ricomposta: i neo coniugi o conviventi, i figli nati da precedenti relazioni e i loro rapporti*, Jovene, Napoli, 2012.

CAGGIA, Fausto, «La complessità nei diritti fondamentali della famiglia nello spazio europeo», in AA.VV., *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, vol. I, ESI, Napoli, 2018.

CAROTA, Lisia, «La tutela del rapporto con il genitore sociale nelle coppie dello stesso sesso e l'orientamento della corte costituzionale sulle modalità di conservazione del rapporto una volta cessata la convivenza», in *Nuove leggi civ.*, 1, 2018.

CICU, Antonio, «Matrimonium seminarium reipublicae», in *Arch. giur.*, 1921, LXXXV.

CICU, Antonio, *El Derecho de familia*, trad. a cura di Santiago Sentis Melendo, con aggiunte a cura di Vittorio Neppi, Ediar, Buenos Aires, 1947.

CICU, Antonio, «La filiazione», II ed., in Filippo Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, vol. III, t. 2, UTET, Torino, 1969.

CINQUE, Maddalena, «Quale statuto per il 'genitore sociale'?', in *Riv. dir. civ.*, 6, 2017.

DEL PRATO, Enrico, «La scelta come strumento tecnico di filiazione», in *Familia*, 4, 2001.

DOGLIOTTI, Massimo, «I 'due padri' e l'ordine pubblico... tra sezioni semplici e sezioni unite», in *Fam. e dir.*, 10, 2018.

DOGLIOTTI, Massimo, «Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri», in *Fam. e dir.*, 6, 2019.

EKELAAR, John, «The End of an Era?», in Sanford N. Katz, in John Eekelaar, Mavis MacLean, (a cura di), *Cross Currents: Family Law and Policy in the US and England*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

FERRANDO, Gilda, «Maternità per sostituzione all'estero: le sezioni unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento», in *Fam. e dir.*, 6, 2019.

FINOCCHIARO, Francesco, *Del matrimonio*, II, in Antonio Scialoja, Giuseppe Branca, Francesco Galgano (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1993.

Fusaro, Andrea, «La sentenza delle sezioni unite sull'assegno di divorzio favorirà i patti prematrimoniali?», in *Fam. e dir.*, 11, 2018.

GAZZONI, Francesco, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 1983.

GEBLER, Marie-Joseph *Le droit français de la filiation et la vérité*, Paris, 1970.

Giacobbe, Giovanni e Pietro Virgadamo, *Il matrimonio*, in Rodolfo Sacco (diretto da), *Trattato di diritto civile*, III, 2, Torino, 2011.

Giunchedi, Diletta, «Maternità surrogata tra ordine pubblico, favor veritatis e dignità della maternità», in *Corr. giur.*, 10, 2019.

Gómez Valenzuela, Manuel Ángel, in José Ramón de Verda y Beamonte (diretto da), *La compensación por desequilibrio en la separación y divorcio. Tratado práctico interdisciplinar, tirant lo blanch*, Valencia, 2022.

GRIMALDI, Ida, «Crisi della famiglia. Separazione, divorzio, divorzio breve», in Giuseppe Cassano, Giacomo Oberto (a cura di), *La famiglia in crisi*, WKI-CEDAM, Padova, 2016.

GROSSI, Paolo, «Sulla odierna fattualità del diritto», in *Giust. Civ.*, I, 2014.

IPPOLITI MARTINI, Carlotta, «I riflessi economici dell'assegnazione della casa familiare», in Enrico Al Mureden, Riccardo Rovatti (a cura di), *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2020.

LA ROSA, Elena, «Commento sub art. 316, c.c.», in Giovanni Di Rosa (ed.), *Della famiglia*, II, in Enrico Gabrielli (diretto da), *Commentario del codice civile*, UTET, Torino, 2018.

LENTI, Leonardo, «Note critiche in tema di interesse del minore», in *Riv. dir. civ.*, 1, 2016.

LENTI, Leonardo, «Responsabilità genitoriale», in Leonardo Lenti, Manuela Mantovani (a cura di), *Il nuovo diritto della filiazione*, in Paolo Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia, Le riforme*, t. II, Giuffrè, Milano, 2019.

LENTI, Leonardo, «Diritto della famiglia», in Giovanni Iudica e Paolo Zatti (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2021.

LUPOI, Michele Angelo, in Enrico Gabrielli (diretto da), «Commentario del codice civile, sub artt. 4», L. 1 dicembre 1970, n. 878, in Giovanni Di Rosa (a cura di), *Della famiglia*, III, 2°ed., UTET, Torino, 2018.

MALAURIE, Philippe e Laurent AYNES, in Philippe Malaurie, Hugues Fulchron (a cura di), *La famille*, IV ed., LGDJ, Paris, 2011.

MORRONE, Andrea, «Commento sub art. 2, Cost.», in Michele Sesta (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Giuffrè, Milano, 2017.

NOVELLO, Federica, «Adozione 'mite' e legame parentale: l'intervento della Corte costituzionale», in *Giustiziacivile.com.*, 23 giugno 2022.

Oberto, Giacomo, «I patti prematrimoniali nel quadro del diritto europeo», in *Corr. giur.*, 6, 2020.

QUADRI, Enrico, «La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze», in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2017.

Quadri, Enrico, «Assegno di divorzio: alle porte la riforma legislativa», in *Giustiziacivile.com*, 20 maggio 2019.

RESCIGNO, Pietro, «Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche», in *Famiglia*, 1, 2002.

RIMINI, Carlo, «Il nuovo divorzio», in Antonio Cicu, Francesco Messineo e Luigi Mengoni (già diretto da), Piero Schlesinger (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale, II - La crisi della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2015.

Rimini, Carlo, «Funzione compensativa e disponibilità del diritto all'assegno divorzile. Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio», in *Fam. e dir.*, 11, 2018.

ROMA, Umberto, «L'assegnazione della casa familiare», in Michele Sesta e Alessandra Arceri (a cura di), *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, Torino, 2012.

Salanito, Ugo, «Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati»; in *Corr. giur.*, 4, 2018.

Salanito, Ugo, «Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità», in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2019.

Scia, Fausta «Le proposte in tema di accordi prematrimoniali: tra valorizzazione dell'autonomia negoziale dei coniugi e specialità delle regole del diritto di famiglia», in *Nuove leggi civ.*, 1, 2017.

SESTA, Michele, «Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare», in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. II, t. 1, Giuffrè, Milano, 1998.

SESTA, Michele, «Filiazione (diritto civile)», in *Enc. dir., Annali*, VIII, Giuffrè, Milano, 2015.

SESTA, Michele e Alessandra ARCERI, «La responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli», in Antonio Cicu, Francesco Messineo e Luigi Mengoni (già diretto da), Piero Schlesinger (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale, La crisi della famiglia*, III, Giuffrè, Milano, 2016.

SESTA, Michele, «La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali», in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2017.

SESTA, Michele, «Sub art. 1, 1° comma, legge n. 76/2016», in Michele Sesta (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Giuffrè, Milano, 2017.

Sesta, Michele, «La rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare nella concreta quantificazione dell'assegno divorzile», in *Fam. e dir.*, 11, 2018.

SESTA, Michele, «Risarcimenti punitivi e legalità costituzionale», in *Riv. dir. civ.*, 1, 2018.

SESTA, Michele, *Manuale di diritto di famiglia*, 8° ed., WKI-CEDAM, Milano-Padova, 2019.

SESTA, Michele, «Adozione consensuale estera e ordine pubblico: una decisione che non persuade», in *Fam. e dir.*, 11, 2021.

STEFANELLI, Stefania, in Andrea Sassi, Francesca Scaglione e Stefania, Stefanelli, *Filiazione e minori*, II ed., in Rodolfo Sacco (diretto da), *Trattato di diritto civile*, UTET, Torino, 2018.

SUMNER MAINE, Henry, *Ancient Law*, John Murray, London, 1861, rist. 1972.

